



UNIVERSIDAD NACIONAL

“PEDRO RUIZ GALLO”

ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

El derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales y la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTOR:

Abog. Luis Alberto Arias Requejo

ASESORA:

Mg. Mary Isabel Colina Moreno

Lambayeque, 2022

El derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales y la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019



Abog. Luis Alberto Arias Requejo
Autor



Mg. Mary Isabel Colina Moreno
Asesora

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

Aprobado por:




Dr. Ezequiel Baudelio Chavarry Correa
Presidente



Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Secretario



Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez
Vocal

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>Tele Educación</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	20-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las **_4pm.** del miércoles 27 de octubre de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°360-2022-EPG, de fecha 1 de abril de 2022, conformado por:

Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
 Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
 Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTÉZ
 Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO

Presidente
 Secretario
 Vocal
 Asesora

Para evaluar el informe de tesis del tesista LUIS ALBERTO ARIAS REQUEJÓ, candidato a optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES, con la tesis titulada "EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA EFICAZ EN LOS CASOS PENALES Y LA ESTRATEGIA PROCESAL DEL ACUSADO EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, A PARTIR DE CASOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2019".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°1048-2022-EPG de fecha 12 de octubre de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole **_30 minutos** de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con **_17** puntos, equivalente a **BUENO**, quedando el candidato apto para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI-EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	----------------------------	----------------

 UNPRG Universidad Nacional Pedro Rolando Rodríguez	ESCUELA DE POSGRADO Dr. Juan Vitor Rodríguez	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	20-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL</u> <u>DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	

CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 5.12 pm. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
PRESIDENTE



Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
SECRETARIO



Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
VOCAL



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
ASESORA



Dedicatoria

El presente trabajo dedico a mis queridos padres que hoy en día desde el cielo me brindan su apoyo y protección, de la misma manera a mi Hermana Elva Sissy Arias Requejo, quienes, con su apoyo incondicional, me ha brindado las fuerzas para concretizar un grado más dentro de mi carrera profesional.

Agradecimiento

Mi agradecimiento en Primer Lugar a Dios, por brindarme la vida y salud, asimismo a mis padres y familiares, y a mi amigo Florentino Santos Ayala Recalde, por su apoyo incondicional en la ejecución de la presente tesis.

Asimismo, al Dr. Jorge Marcelino Pérez Toro y al Dr. Cesar Bravo Yaque, quienes con su apoyo a permitido hacer realidad este proyecto.

Índice General

Dedicatoria.....	V
Agradecimiento	VI
Índice General.....	VII
Resumen.....	IX
Abstract.....	X
Introducción	11
Capítulo I.....	17
Diseño Teórico.....	17
1.1. Antecedentes de la Investigación	18
1.2 Base Teórica	21
1.2.1. La investigación preparatoria.....	21
1.2.2 La etapa intermedia	32
1.2.3. Juicio oral.....	40
1.2.4. Principios que rigen el juicio oral.....	42
1.2.5. El debido proceso penal.....	48
1.2.6. El derecho de defensa	49
1.2.7 Derecho a la Defensa Técnica Eficaz	59
1.3. Variables.....	64
1.4 Operacionalización de Variables.....	64
1.5 Hipótesis	65
Capítulo II.....	66
Métodos y Materiales.....	66
2.1 Tipo de Investigación	67
2.2 Método de Investigación	67
2.3 Diseño de Contrastación	69
2.4 Población, Muestra y Muestreo	69
2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos	71
Capítulo III.....	72
Resultados.....	72
Capítulo IV	93
Discusión	93

Conclusiones	108
Recomendaciones	111
Referencias Bibliográficas.....	112
Anexos	115
b) Formulación del Problema de Investigación	118
c) Objetivos de la Investigación	118
Justificación de la Investigación.....	118
Hipótesis	120

Resumen

Con la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, han aparecido y reafirmado nuevas instituciones procesales, que tienen como finalidad el respeto de los derechos de la parte y de proscribir la arbitrariedad como parte del juicio oral penal.

Uno de estos aspectos tiene que ver con la necesidad de ejercer control sobre las pretensiones de las partes con la finalidad de que realmente vaya a juzgamiento los casos que tengan trascendencia para llegar a dicho estado procesal, y para esto se ha diseñado, procedimientos que en su conjunto reciben el nombre de etapa intermedia y en la que bajo la dirección del juez las partes han de postular sus pretensiones, luego de lo cual se ha de decidir la procedencia del juzgamiento y la admisión de los medios probatorios que se han de actuar en el mismo.

Este desempeño de las partes durante la etapa intermedia exige en las defensas técnicas un conocimiento jurídico que va desde el conocimiento de la Teoría del delito hasta la evaluación del quantum de la pena, debiendo incluso aplicar conocimiento del proceso penal para plantear un medio de defensa o el propio sobreseimiento. Sin embargo, nos corresponde efectuar una pregunta referida a si los sujetos procesales a través de sus abogados patrocinadores están en condiciones de ejercer una defensa realmente técnica. Sobre esto versa el presente trabajo de investigación, y la presente investigación que también es teórica deberá evaluar en la práctica si es que los letrados se encuentran debidamente preparados para hacer frente a una defensa técnica penal, más aún en una localidad como es la ciudad de Chiclayo, localidad en la que convergen ya más de diez años de la puesta en práctica del nuevo proceso penal.

Abstract

With the entry into force of the new criminal procedure, new procedural institutions have appeared and have been reaffirmed, whose purpose is to respect the rights of the party and to proscribe arbitrariness as part of the oral criminal trial.

One of these aspects has to do with the need to exercise control over the pretensions of the parties, with the purpose of actually prosecuting cases that have significance to reach this procedural status, and for this have been designed procedures, which taken as a whole, are called the "intermediate" stage, in which, under the direction of the judge, the parties have to postulate their claims, after which it is necessary to decide if the trial is applicable and the admission of the evidentiary means, that must be act on it.

This performance of the parties during the intermediate stage requires in technical defenses a legal knowledge that ranges from knowledge of the Theory of crime to the evaluation of the quantum of the sentence, even applying knowledge of the criminal process to propose a means of defense or the dismissal itself. However, it is up to us to make a question regarding whether the procedural subjects, through their sponsoring attorneys, are in a position to exercise a truly technical defense.

This research work is about this, and this research, which is also theoretical, should evaluate in practice whether the lawyers are properly prepared to face a criminal technical defense, even more so in a locality such as the city of Chiclayo, a town in which more than ten years of the implementation of the new criminal process have converged.

Introducción

El proceso penal instaurado con el nuevo Código Procesal Penal trajo consigo nuevas funciones a cumplir, y un trabajo mucho más responsable a realizar. Sin lugar a dudas, las definiciones de roles en cada sujeto procesal, supuso que las partes deben estar preparadas no sólo en el conocimiento del nuevo devenir contenido en ese conjunto de procedimientos, sino fundamentalmente en conocer de estrategias de litigación en las que se debe tener claro la presentación de pretensiones ante el juez penal, director del proceso en las dos últimas etapas.

Sin embargo, a pesar que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal fue avisada con mucha atención, al parecer aún en las ciudades que concentran gran cantidad de casos, no hubo la debida preparación en todos los operadores del derecho y en muchos casos las defensas técnicas asumieron fundamentalmente un papel pasivo en el ejercicio de la profesión en el campo penal, lo que originó que sus patrocinados vayan en desventaja al proceso penal.

Y esto que pueda pasar desapercibido en un primer momento, resulta importante en un proceso penal en la que se tiene que decidir la libertad de una persona sobre la que se formulado una acusación fiscal, y en la que la perentoriedad de las etapas hace que todos los plazos precluyan, y que pierda la oportunidad del ejercicio del derecho defensa.

Por esta razón consideramos realizar el presente trabajo a fin de establecer cuál es el desempeño procesal de la defensa técnica del procesado, a fin de determinar de qué manera se afronta las observaciones que se hagan a la acusación fiscal, entendiendo que la etapa

intermedia es la más técnica de todas y en la que el abogado si decide contradecir tendrá necesariamente que aportar al contradictorio y ofrecer por lo menos medios probatorios que hagan viable las afirmaciones que se precisan al absolver la acusación.

No debe dejarse de lado que toda aquella persona que hace frente a un proceso penal en calidad de acusado, sabe que tiene la posibilidad real de verse afectado en su libertad personal, que a la vez lo puede llevar a permanecer algún tiempo privado de su libertad individual y esto implica la urgencia de verse asesorado por un abogado que no sólo represente el interés procesal del encausado, sino también que organice su defensa con actos concretos que sean expresión que quiere se esclarezcan.

Esto precisamente porque a más de diez años de puesta en marcha del proceso penal, se debe precisar que debe haberse asumido que implica el cambio de actitudes y comportamientos de las partes procesales, pero sobre todo el diseño de estrategias que partan de un sinceramiento de las posibilidades de éxito, todo en beneficio de los sujetos procesales a quienes se defiende y de quienes se busca se declare en derecho para que se establezca la justicia, la misma que resulta ser la finalidad del trabajo de todos.

De manera especial, se debe expresar que se va a analizar el trabajo que realizan los abogados defensores en los casos en los que les toca patrocinar a los procesados, puesto que para asumir, preparar, conducir y ejecutar una defensa dentro del contexto del Nuevo Código Procesal Penal, se debe saber cuál es el rol que como actores del proceso nos toca asumir a partir del inicio de las diligencias preliminares. Tomar bajo nuestro control una defensa técnica en el marco de las vigentes normas adjetivas, supone por un lado tener presente que no es nuestro interés el que debe prevalecer, pues defendemos a la sociedad, o al agraviado

o el caso del actor civil, por otro lado estar en condiciones de afirmar que la defensa que vamos a realizar va a tener éxito, incluso a pesar que existen elementos de prueba que hacer indicar a toda luz que el procesado resulta ser responsable del ilícito que se recoge en la acusación.

Este abanico de posibilidades reales decide la posibilidad de éxito de un caso, incluso la del propio representante del Ministerio Público, y muy por el contrario de lo que pueda afirmarse, a veces perdiendo el caso con respecto al acusado, éste resulta ser beneficiado con la rebaja de la pena privativa de la libertad, en estricto cumplimiento del derecho premial que reconoce nuestra legislación procesal.

Sin embargo, cabe preguntarse si realmente la estrategia de defensa resulta ser la más conveniente en el sistema que implementamos, o si es que la estrategia que diseñamos refleja la realidad de lo que el acopio de elementos de convicción o elementos de pruebas que se han acopiado, y sobre los que se debe construir el sentido de contradicción en la audiencia de control de acusación?

Lo cierto es que terminada la etapa de la investigación preparatoria, las partes en un proceso deben tomar decisiones, deben adoptar las mejores decisiones: se sobresee, se acusa, se fija monto de reparación civil, se hace defensa negativa, defensa positiva o defensa mixta, etc., pero en todos los casos se asume una determinación por la que se tiene que responder en juicio.

Pero el diseño de la defensa que se exige en la tramitación de casos penales, no es precisamente una del tipo complaciente, o de acompañamiento de la tarea que realiza el

Ministerio Público, sino fundamentalmente una que agote toda posibilidad de defensa que suponga lo más conveniente para el interés del acusado. Esto por cuanto es de común acuerdo que existe hasta tres posibilidades de ejercer la defensa técnica en un caso penal: o se acepta la pretensión del Ministerio Público, o se contradice la misma en todos sus extremos o es que se acepta el elemento fáctico propuesto, pero se contradice la reparación civil o el quantum de la pena.

En el centro de esta inquietud se propone iniciar el presente trabajo de investigación a fin de establecer cómo las partes tomando la perspectiva de la acusación realizada por el Ministerio Público, disponen cada uno de los elementos que forman parte de su estrategia de defensa, y cómo consecuencia de ello, se quiere establecer de qué manera o con qué elementos probatorios van a acreditar la tesis de defensa que asumen. Desde este sentido, se quiere describir y analizar el trabajo estratégico del abogado defensor pero tomando como base algunos casos que se han desarrollado en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Por ello el problema en el presente caso queda determinado de la siguiente forma:

¿De qué manera el derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019”

Como objetivo general se pretendió determinar la manera cómo el derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales se debe manifestar en la estrategia procesal del

acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019.

Como objetivos específicos:

1. Precisar las características del derecho a la defensa técnica eficaz del procesado en casos penales.
2. Describir la dimensión de la audiencia de control de acusación como parte del nuevo proceso penal peruano.
3. Establecer las razones por las que resulta determinante consolidar las estrategias de la teoría del caso en la audiencia de control de acusación.
4. Analizar actuaciones procesales de las partes en casos ocurridos en el juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, durante el año 2019.

Cuando afirmamos que en el nuevo proceso penal debemos tener claro cuál es el rol de las partes en cada etapa procesal, estamos aludiendo no sólo al deber de conocimiento que debe tener cada parte del nuevo ordenamiento procesal, sino fundamentalmente de la obligación de elaborar y presentar al juez al juez la teoría del caso correspondiente pero de manera oportuna.

Esto quizá no pueda ser entendido sino en función del principio de preclusión que rige cada estado del proceso penal, que significa que una vez vencido el plazo de actuación de las partes, no se puede ya ejercer el derecho de defensa con actos procesales que de por sí ya caducaron, con el terrible perjuicio que esto significa pues en la práctica lo que no hice en la oportunidad debida resulta imposible que pueda ejecutarlo en la siguiente etapa procesal.

Por esta razón entonces se debe observar en el momento oportuno, se debe objetar en el momento oportuno, se debe cuestionar en el momento oportuno, se debe proponer en el momento que corresponde, se debe ofrecer en el instante en el que la ley así lo dispone; de lo contrario se debe afrontar la responsabilidad procesal que ello origina, siendo muy perjudicial el caso del procesado o acusado en la medida en la que se encuentra en juicio su propia libertad ambulatoria.

JUSTIFICACION.-

Entonces la justificación del presente trabajo estriba en la necesidad de que las partes entiendan que si bien resulta fundamental prepararse para afrontar el juzgamiento oral, es de mucha relevancia el diseño de estrategia que se debe hacer pero a partir del control de acusación, pues buena parte del futuro del procesado se define precisamente en dicho estado procesal.

Como se podrá advertir, el presente trabajo resulta importante pues constituye una invitación para investigar sobre la manera cómo las partes asumen su responsabilidad procesal a partir de la audiencia de control de acusación, pero sobre todo por describir y analizar las opciones procesales que adoptan los sujetos procesales en etapa, la misma que debe considerarse como clave para establecer la responsabilidad penal del procesado.

EL AUTOR

Capítulo I

Diseño Teórico

1.1. Antecedentes de la Investigación

Huamán, B, (2019), El proceso inmediato en el delito de conducción en estado de ebriedad y el derecho a contar con una defensa eficaz en el marco de código procesal penal, Huaraz, 2019.

En un Estado constitucional y democrático de derecho, la supuesta rapidez introducida por el D.L. 1194, siendo diminutos los plazos, parece arriesgar el cumplimiento de ciertas condiciones del debido proceso, dentro de ellas está el tiempo razonable para preparar defensa, que constituye la manifestación de la garantía constitucional de derecho de defensa, establecida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Perú.

El ejercicio del derecho de defensa en el proceso penal, tiene una doble dimensión: Una material, que consiste en que el imputado ejerce su propia defensa desde el momento que toma conocimiento de los cargos hasta el término del proceso; y otra formal, que es la defensa técnica; que consiste en el asesoramiento de un profesional en derecho durante todo el proceso. En ese sentido, debe garantizarse el derecho de defensa eficaz, que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa.

El procedimiento inmediato por flagrancia una persona es sentenciada en menos de veinticuatro (24) horas; ya que, la audiencia única de juicio inmediato se realiza en el día, apenas recibido el auto que incoa el proceso, y excepcionalmente sin exceder las setenta y dos (72) horas, afecta el derecho a tener tiempo razonable para preparar

defensa, sea para la negociación (adopción de salidas alternativas) o refutación de los hechos imputados. Resulta difícil que en menos de veinticuatro (24) horas se pueda elaborar una estrategia de defensa con estándar y exigencia que la naturaleza de cada caso impone.

La detención en flagrancia constituye de alguna forma un claro atentado contra los derechos fundamentales de las personas, esto, por situaciones en la que la persona procesada no se encuentra debidamente protegido y amparada, y más todavía cuando en el poco tiempo, tiene que sustentar su teoría del caso para su defensa respectiva. Si bien es cierto que la constitución reconoce los derechos de la persona como derechos fundamentales, las aplicaciones de estos tipos de normativas infringen dichas disposiciones constitucionales tal es el caso del derecho a la defensa, al plazo razonable, el derecho al debido de proceso entre otros.

El proceso inmediato en delitos de conducción en estado de ebriedad vulnera el derecho de defensa y otros como el derecho a la presunción de inocencia resulta vulnerado cuando la sentencia condenatoria se basa, única y exclusivamente, en la realización de la prueba de alcoholemia. En este sentido, ella es una prueba pericial latu sensu que, aun formando parte del atestado policial y, por tanto, en principio con mero valor de denuncia, se configura como prueba pericial preconstituida con valor probatorio capaz de destruir tal presunción siempre y cuando sea sometida a contradicción en el juicio oral sus resultados y su forma de ejecución- mediante el interrogatorio de quienes intervinieron en su práctica, o mediante su complementación con la propia declaración del inculpado, la del perjudicado o la de testigos, como por ejemplo los agentes de la autoridad que intervinieron a aquél.

Melgarejo, M, (2019) Necesidad probatoria en el proceso inmediato y derecho de defensa eficaz, Chimbote - Perú

- La necesidad probatoria en el proceso inmediato vulnera el derecho de defensa eficaz, toda vez que se suprime las fases de un proceso común, el ejercicio de la defensa técnica se ve limitada por la celeridad del proceso.

. Se determinó que el plazo razonable en dicho proceso resulta inadecuado, toda vez que el tiempo concedido resulta insuficiente para el abogado del procesado intervenga en todos los actos del proceso como formular y probar sus alegaciones, contradecir las imputaciones realizadas en su contra, utilizar los mecanismos pertinentes, en la medida que esta resulte suficiente y necesaria para que el abogado introduzca medios probatorios.

- Se determinó que el proceso inmediato no garantiza el ejercicio de defensa eficaz, debido a que la defensa carece de eficacia al no ejercerse con igualdad en la etapa demostrativa de la actividad probatoria, por la celeridad en el que avanza el proceso inmediato, lo cual el tiempo le queda corto para tratar de reunirlos, lo cual el defensor muchas veces tiene que optar por llegar a una salida alternativa, al resultar imposible demostrar la inocencia de su patrocinado.

Del Carpio, (2018), Vulneración a la defensa eficaz del imputado en el proceso inmediato en los delitos de homicidio simple de los Juzgados de la Corte de Justicia del Santa, Chimbote, 2017

Conclusión general

- No se vulnera el derecho a la defensa eficaz del imputado en el proceso inmediato en los delitos de homicidio simple de los Juzgados de la Corte de Justicia del Santa Chimbote – 2017, por tanto, el proceso inmediato cumple su finalidad en cuanto a efectividad y reducción de carga procesal, además de la reducción de los procesos ingresados.

Conclusiones específicas

- En la investigación se estableció la conveniencia del Proceso Inmediato ya que la mayoría de abogados coincide en reconocer que este es conveniente ya que se cuenta con un plazo razonable ya que este tipo de proceso tiene como finalidad impedir que los justiciables permanezcan durante largo tiempo en una situación indeterminada acerca de su estadio en el proceso .
- Se estableció que no se vulnera el derecho a la defensa eficaz ya que no habría afectación de este principio esencial al no limitarse de este derecho fundamental a la defensa en ningún estado o etapa del proceso o de la inmediata información del motivo de su detención al involucrado y tiene que ser mediante escrito (tabla 10)
- La presente investigación se analizó estadísticamente y se evidenció que el proceso inmediato es conveniente ya que cuenta con un plazo razonable y no vulnera el derecho a la defensa eficaz ya que el tiempo brindado es prudencial.

1.2 Base Teórica

1.2.1. La investigación preparatoria

Refiere Peña Cabrera (2008) que

“Es la primera etapa del proceso penal común, y se desencadena luego de tomarse conocimiento de un hecho presuntamente delictivo; así, la

Investigación Preparatoria tiene por finalidad recopilar los medios de prueba de cargo y descargo, que sirvan al Fiscal de la Investigación Preparatoria para sostener válidamente la imputación delictiva que recae sobre el imputado, determinando la forma de comisión del delito, los medios utilizados para su perpetración, los móviles, el grado de perfección delictiva y la individualización de los involucrados de conformidad con la relevancia de su participación en el evento criminoso, la identidad de la víctima y la cuantificación de la magnitud del daño causado por los efectos perjudiciales de la conducta criminal, conforme a lo establecido en el artículo 321 del NCPP”.

En efecto, el referido artículo 321° del Código Procesal Penal establece como finalidad de la investigación preparatoria el reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.

La investigación preparatoria, en consecuencia, está destinada a la realización de actos de investigación destinados a reunir elementos que permitan sustentar la imputación que respalde el planteamiento de una pretensión punitiva en la acusación, o de ser el caso que se reúna información de descargo.

Dentro de la investigación preparatoria Rosas (2009) refiere que se engloban dos fases, la primera de ellas constituida por las denominadas diligencias preliminares; y por otro, la investigación preparatoria propiamente dicha,

En ese sentido señala el autor que

“La investigación preparatoria como primera etapa del proceso común tiene dos fases: la investigación preliminar (diligencias preliminares) y la investigación preparatoria propiamente dicha o formalizada” (p. 395)

Asimismo, esta etapa encierra cuatro tipos de actividades: “1.Actividades de pura investigación; 2. Decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento; 3. Anticipos de prueba, y, 4.Decisiones o autorizaciones, vinculadas a actos que pueden afectar garantías procesales o derechos constitucionales”.

Respecto a las diligencias preliminares, el Dr. Angulo (2006) nos dice con respecto a éstas que se:

“Pretende identificar al primer momento o a los actos iniciales de la investigación, en que se confirmará o descartará la existencia del ilícito – para continuar - lleva el mensaje de que no se ha querido crear una etapa ni sub etapa previa a la investigación preparatoria, sino que se identifica apenas una situación o lapso temporal en el cual se acumularán elementos de juicio para determinar la existencia del ilícito penal”. (p. 120)

Como se ha señalado según lo establece el Nuevo Código Procesal Penal, las

Diligencias Preliminares tienen por finalidad que el Fiscal por sí mismo o con la intervención de la Policía, realice los actos urgentes o inaplazables a fin de determinar de forma inmediata si el hecho del que ha tomado conocimiento se ha producido y si tiene carácter delictuoso; asegurar los vestigios materiales del hecho denunciado adoptando las medidas pertinentes y necesarias para protegerlas y aislarlas resguardando su capacidad probatoria; lograr la individualización del presunto autor y si de ser el caso la acción se encuentre expedita para ser ejercida – no se encuentre prescrito.

De otro lado, si el Fiscal, luego de calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado.

La citada disposición de archivo impide que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una Investigación Preparatoria por los mismos hechos, salvo que se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial.

Sobre la investigación preparatoria existen opiniones doctrinarias sobre esta etapa, así Baytelman & Duce (2005) se ha señalado que:

“La Investigación es preparatoria porque persigue reunir elementos de convicción necesarios para determinar si hay causa probable y base suficiente para iniciar un juicio oral, y porque construye la pretensión punitiva y deja expedito para la verdadera actuación probatoria y cabal debate en juicio. Compuesta de actos que recogen información sobre el delito y su autor los que no tienen calidad de prueba” (p. 22)

Ore (2016) refiere que:

“La investigación preparatoria se inicia con la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria la cual constituye un acto procesal no jurisdiccional, de competencia fiscal, a través del cual, luego de definir provisionalmente el objeto del proceso penal, se da inicio formal a la etapa de investigación preparatoria” (p. 104)

Sobre el acto de formalización de la investigación preparatoria el jurista

Neyra (2010) ha señalado que:

“Terminadas las diligencias preliminares, el fiscal asume las funciones que con el C de PP 1940 tenía el Juez instructor, pues con este nuevo código la investigación propiamente dicha está a cargo del Fiscal y no del Juez instructor dejándose de lado el auto de apertura de instrucción para dar paso a la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria emanada por el Fiscal en virtud de la cual dirige la etapa de investigación bajo su responsabilidad” (p. 295)

Según el artículo 336°, inciso 2° la disposición de formalización de investigación preparatoria debe contener: a) El nombre completo del imputado; b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación; c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.

Peña (2011) refiere que:

“La formalización de la investigación preparatoria reviste trascendencia toda vez que a través de ella se prevé la garantía al derecho de defensa del imputado, en la medida que es informado de los cargos que se le formulan, así como establecer el sustento fáctico de las imputaciones que originan la investigación, evitando también las acusaciones sorpresivas, lo que permite al imputado elaborar su defensa dentro del ámbito fáctico y jurídico sobre el cual el fiscal decidirá sobre la formulación de una acusación o el requerimiento de sobreseimiento de la causa”.

Peña (2011) señala que

“La trascendencia de esta etapa viene dada por el carácter determinante que tiene la realización de una adecuada investigación para generar la base de una futura decisión judicial, en ese sentido se ha señalado que si la investigación penal no ha sido llevada, de forma eficiente, en base a una estrategia consistente, no se podrá condenar al imputado, por más culpable que éste sea, pues la sentencia penal no es el dictado de emotividades o de juicios subjetivos

por parte del juzgador, sino de una base confiable, que solo puede desprenderse de un acervo probatorio sólido, idóneo y eficaz, manifestado en una actuación probatoria que toma lugar en el escenario del juzgamiento” (p. 212)

Neyra (2010) Señala que:

“De la investigación preparatoria, como hemos señalado forma la base sobre la cual a posterioridad se determinará la formulación de una acusación o el sobreseimiento de la causa, así la investigación preparatoria persigue dos finalidades principales: preparar el juicio oral y/o evitar juicios innecesarios” (p. 271)

La dirección de esta importante etapa procesal se encuentra conferida al Ministerio Público, en virtud a lo dispuesto en el artículo 60°, inciso 2° del Código Procesal Penal, realizando por si mismo o con el apoyo de la Policía Nacional las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; sobre el particular Neyra ha señalado que el Ministerio Público debe realizar la investigación del delito siempre de manera objetiva y completa, es decir, no puede por razones estratégicas, ocultar hechos relevantes que hubiere descubierto, ni tampoco pruebas que den resultados diversos a su acusación o que afecten su teoría del caso” (Neyra, 2010, p. 274)

La función del Ministerio Público se aprecia también en el contenido del artículo 322° que establece que: “El Fiscal dirige la Investigación

Preparatoria. A tal efecto podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional”.

Para el desempeño de la función de investigación, el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la Policía Nacional así como de otras entidades, conforme se ha precisado en el artículo 321°, incisos 2° y 3°:

(...) 2. La Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía Contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal y los demás organismos técnicos del Estado, están obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las universidades, institutos superiores y entidades privadas, de ser el caso y sin perjuicio de la celebración de los convenios correspondientes, están facultados para proporcionar los informes y los estudios que requiere el Ministerio Público. La Contraloría General de la República, conforme a sus atribuciones y competencia, a solicitud del Titular del Ministerio Público, podrá prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la normativa de control."

3. El Fiscal, mediante una Disposición, y con arreglo a las directivas emanadas de la Fiscalía de la Nación, podrá contar con la asesoría de expertos de entidades públicas y privadas para formar un equipo interdisciplinario de investigación científica para casos específicos, el mismo que actuará bajo su dirección.

Asimismo el artículo 322° establece en su inciso 2° que;

(...) 2. Para la práctica de los actos de investigación puede requerir la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley. (...)

Asimismo, como hemos señalado, la formalización de la investigación preparatoria determina también la competencia del Juez de Investigación Preparatoria, quien conforme al artículo 323° del Código Procesal Penal tiene como funciones:

Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este Código.

El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado para:

a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código Peña (2011) señala que

“El Juez de investigación Preparatoria tiene una esencial función garantista de los derechos de las partes procesales, con especial incidencia en los del imputado; en ese sentido el juez de investigación preparatoria “...no revela una mera posición decorativa, sólo para garantizar la jurisdicción a las partes del proceso, sino que muchas decisiones de importancia en la IP, ameritan necesariamente de una resolución jurisdiccional autoritativa-debidamente motivada” (P. 271-272)

Elemento importante a resaltar sobre esta etapa es su carácter reservado, según el cual sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos, quienes en cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones, según lo establece el artículo 324° del Código Procesal Penal, conforme al cual el Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes; asimismo señala que las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El Abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva de Ley, bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio.

En cuanto a las diligencias de investigación preparatoria se tiene que el Código Procesal Penal ha establecido:

Artículo 337 Diligencias de la Investigación Preparatoria.-

2. El Fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley.
3. Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción
4. El Fiscal puede:
 1. Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva;
 2. Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.
5. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al Fiscal todas aquellas diligencias que

consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes.

6. Si el Fiscal rechazare la solicitud, instará al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El Juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el Fiscal.

1.2.2 La etapa intermedia

La segunda etapa del actual proceso penal, está constituida por la denominada etapa intermedia, que abarca desde la conclusión de la investigación preparatoria hasta la emisión del auto de enjuiciamiento o declaración del sobreseimiento de la causa. Sobre esta etapa la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 ha señalado “[...] la etapa intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento principal [...]”.

Así, la etapa intermedia busca determinar, conforme a los resultados emanados de la fase preparatoria si hay o no causa pasible de examen en juicio, al respecto Neyra (2010) refiere que es:

“Una etapa filtro que tiene como función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin de establecer si es viable

para convocar debate penal pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o preclusión del proceso” (P. 300)

Para Binder (2004):

“Esta segunda etapa del actual proceso penal se torna en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos” (p. 248)

Siempre, luego de esta discusión preliminar, se produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide admitir la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase; si no se admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento. (Binder, 2004, p. 250)

En consecuencia, la etapa intermedia desemboca en dos posibles resultados el requerimiento de sobreseimiento o el requerimiento acusatorio, los que a continuación se describe:

1.2.2.1. Requerimiento de Sobreseimiento

El sobreseimiento de la investigación se encuentra previsto en el artículo 344º, inciso 2º del Código Procesal Penal, el cual implica el archivo de lo actuado, y procede en los siguientes supuestos:

- a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado.
- b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad.
- c) La acción penal se ha extinguido.
- d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

Sobre el sobreseimiento la doctrina ha establecido dos clases de requisitos, los materiales y formales, siendo que respecto a los primeros, San Martín (2003) ha señalado que son cuatro los presupuestos de derecho material que se han identificado en la doctrina procesalista:

- a) insubsistencia objetiva del hecho, es decir cuando hay una absoluta convicción de que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en la realidad;
- b) inexistencia del hecho punible, cuando si bien el hecho investigado existe es atípico;
- c) falta de indicios de responsabilidad penal, es decir faltan indicios racionales de delictuosidad en el imputado, causa de justificación, legítima defensa, error vencible y,

d) prueba notoriamente insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva (p. 618)

Por su parte, los requisitos formales se relacionan al supuesto en que la acción se haya extinguido, que el hecho objeto de la causa no pueda atribuírsele al imputado por faltar un presupuesto que condiciona la válida iniciación del proceso penal”

El trámite del requerimiento de sobreseimiento se encuentra establecido en el artículo 345° del Código Procesal Penal que precisa:

“1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento, acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la solicitud a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días.

2. Los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes.

3. Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por su

orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución se emitirá en el plazo de tres días.

En ese sentido el requerimiento de sobreseimiento se formula por el Fiscal ante el Juez de Investigación Preparatoria, quien ejercerá la labor de control y filtro del mismo, a fin de determinar la procedencia o no de lo solicitado. Este sometimiento del requerimiento de sobreseimiento se da en el marco de una audiencia, la cual según San Martín (2005) “posibilita el contradictorio entre los distintos sujetos procesales. Es una audiencia de carácter imperativo, por cuanto se realiza incluso, cuando las partes no formulen oposición al requerimiento fiscal o no soliciten una investigación suplementaria para actuar los actos de investigación omitidos” (p. 37)

Sobre el requerimiento de sobreseimiento el Juez se pronunciará en el plazo de quince días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto debidamente motivado, elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal

Provincial, quien deberá pronunciarse en un plazo de diez días.

Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la Investigación Preparatoria inmediatamente dictará auto de sobreseimiento, caso contrario, es decir si el Fiscal Superior rectifica el

requerimiento de sobreseimiento, ordenará a otro Fiscal que formule acusación.

Finalmente es necesario precisar que el Código Procesal Penal, en su artículo 348°, establece la posibilidad de sobreseer una causa de manera total o parcial, precisando que será total cuando comprende todos los delitos y a todos los imputados; y parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito o algún imputado, de los varios que son materia de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria; en este caso continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende.

1.2.2.2. Requerimiento acusatorio

Si por el contrario a lo señalado en el acápite anterior, de los resultados de la investigación preparatoria se advierte que existen suficientes elementos de convicción respecto a la comisión del delito y de la autoría del imputado, el Fiscal deberá proceder a la formulación del requerimiento acusatorio.

El Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, sobre la acusación ha señalado que: La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública [...] Mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal; esto es, la petición

fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado [...].

El procedimiento luego de formulado el requerimiento acusatorio, continúa con el traslado del mismo a los demás sujetos procesales por parte del Juez de Investigación Preparatoria, por el plazo de diez días dentro de los cuales podrán exponer lo que a su derecho convenga y presentar los medios de prueba que consideren pertinentes, luego de lo cual se cita para audiencia de control de acusación, el cual abarca el control formal, sustancial y de admisión de medios de prueba.

El control formal está referido a evaluar el cumplimiento de los presupuestos contenidos en el artículo 349° del Código Procesal Penal actual, en base a lo cual incluso el Juez podrá solicitar la subsanación de los defectos formales identificados. Incluso según lo previsto en el artículo 352°, inciso 2°, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concurrentes.

Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable.

En ejercicio del control sustancial el Juez de Investigación Preparatoria valora el fondo del requerimiento fiscal, situación que le permite tomar las decisiones que considere pertinentes como: desestimar excepciones o medios de defensa, o de ser el caso dictar el sobreseimiento debidamente motivado de oficio o a pedido del acusado o su defensa.

El control de admisión de pruebas se refiere a la valoración en audiencia de los medios de prueba ofrecidos por las partes, incluido el actor civil, quienes tienen el derecho a ofrecer cuanto elemento consideren que constituye aporte en respaldo de sus argumentos, en búsqueda de crear en el juzgador convicción sobre los mismos; sobre el derecho de prueba Talavera (2009) señala que:

“Por regla general se puede ofrecer cualquier medio de prueba para probar cualquier hecho objeto de prueba, siempre que no esté expresamente prohibido o no permitido por la ley. En este contexto, encontramos los medios de prueba típicos, es decir los previstos normativamente; sin embargo, por el principio de libertad de prueba”
(p. 24)

Respecto a la admisibilidad de pruebas por parte del Juez de Investigación Preparatoria, el Código Procesal Penal establece tres

importantes precisiones. La primera se halla en el artículo 385.2, la cual permite al juez una vez culminada la recepción de los medios de prueba: [...] disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. En segundo lugar, el artículo 373.1 posibilita, de disponerse la continuación del juicio, que las partes ofrezcan nuevos medios de prueba, de los que sólo se admitirá aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Y en tercer lugar, se permite a las partes, en aplicación del artículo 373.2, reiterar el ofrecimiento de los medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, requiriendo para ello especial argumentación, siendo el juez quien decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes.

1.2.3. Juicio oral

La tercera etapa del proceso penal es la denominada juicio oral, la cual se desarrolla luego de que el Fiscal haya formulado el requerimiento acusatorio, y el juez de investigación preparatoria haya admitido las respectivas pruebas presentadas por las partes, para lo cual remite todo el expediente al juez o tribunal que deberá llevar a cabo el juicio oral, quienes al recibirlos deberán emitir una resolución judicial donde comunique a los sujetos procesales la fecha, hora y lugar de realización del juicio oral – auto de citación a juicio.

Según afirma Sánchez (2009)

“La fase de juzgamiento está constituida por los actos preparatorios, la realización del juicio oral y culmina con la expedición de la sentencia sobre el proceso penal. La parte central es el juicio oral, espacio procesal donde las partes habiendo asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad del acusado” (p. 175)

En el juicio oral se lleva a cabo todo el debate probatorio a fin de determinar la existencia o no de responsabilidad del procesado, en consecuencia resulta trascendente el respeto a los principios que la rigen a fin de garantizar el derecho de las partes.

La centralidad del juicio oral radica en que las partes podrán argumentar y probar sus pretensiones frente a frente, ya no ante un juez de control o garante (cuya actuación opera en la fase de investigación), sino ante el juez de conocimiento, quien tiene la potestad de resolver el conflicto suscitado.

Como señala Binder (1993) el juicio es la etapa principal del proceso penal porque es allí donde se resuelve o redefine de un modo definitivo –aunque revisable– el conflicto social que subyace y da origen al proceso penal (p. 233)

Respecto a esta etapa debe precisarse que el artículo 353°, inciso 2° de Código Procesal Penal establece el contenido del auto de enjuiciamiento bajo sanción de nulidad, que viene dado por:

- a) El nombre de los imputados y de los agraviados, siempre que en este último supuesto hayan podido ser identificados.
- b) El delito o delitos materia de la acusación fiscal con indicación del texto legal y, si se hubiere planteado, las tipificaciones alternativas o subsidiarias;
- c) Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad con el numeral 6) del artículo anterior;
- d) La indicación de las partes constituidas en la causa;
- e) La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral.

1.2.4. Principios que rigen el juicio oral

Según el artículo 356° del Código Procesal Penal, el juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el cual más allá de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios

de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor.

1.2.4.1. Oralidad:

Este principio es de vital trascendencia al constituir la base de una justicia garantista de derechos de las partes; en esta etapa todo lo expuesto o argumentado por las partes o por el juzgador, al ser expresados verbalmente permite la comunicación durante la audiencia y la actuación de sus intervinientes, incluso se prevé la posibilidad del apoyo de un intérprete o traductor, si así se requiriera.

El juicio debe realizarse según Neyra (2010):

“De forma oral, pública y contradictoria ya que representará la fase central del proceso, y en ella el juez o Tribunal decidirá en base a argumentos y pruebas actuados en el debate contradictorio, que se realizará utilizando las técnicas de litigación oral que constituirán una herramienta sustancial-, la solución del conflicto” (p. 318)

Según Machuca (2004) debe ser entendido en dos dimensiones: “En sentido amplio y en sentido estricto (llamada oralidad inmediatez).

Este último sentido, implica: Pensar en un complejo de subprincipios que deben estar presentes cuando se examina un proceso oral. Cuando se piensa en un proceso oral se pretende el contacto directo del magistrado con las partes y con la prueba del proceso, a fin de permitir

la solución más adecuada y la depuración más precisa de los hechos de la causa” (p. 65)

1.2.4.2. Publicidad

Al respecto Oronoz (2006) indica que para que se logre una verdadera justicia, el proceso debe realizarse frente a la comunidad, de modo que los ciudadanos aprecien si los funcionarios judiciales desarrollan su actividad de conformidad con las normas procesales, desde el mismo momento en que se formula la acusación hasta la sentencia. (p. 157)

Neyra (2010) refiere que:

“El Código Procesal Penal de 2004 señala expresamente en el artículo 357.1, que el juicio oral será público; posición acertada si se toma en cuenta que: La publicidad equivale a la posibilidad de percepción de las actuaciones verificadas por y ante el tribunal por personas que no forman parte del mismo. En ese sentido estamos convencidos que representa la garantía más idónea para que un proceso se lleve a cabo acorde con las Normas Internacionales de Derechos Humanos y Constitución Política del Estado que velan por un debido proceso (p. 351)

Esta publicidad puede ser directa, cuando hay concurrencia del público en sede judicial, e indirecta cuando la ciudadanía conoce del mismo a través de las distintas formas de comunicación” (Sánchez, 2009, p. 177)

Las excepciones al carácter público del juicio oral se encuentran establecidas en el artículo 357° del Código Procesal Penal, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes en el juicio;
- b) Cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional;
- c) Cuando se afecte los intereses de la justicia o, enunciativamente, peligre un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la audiencia;
- d) Cuando esté previsto en una norma específica;

Asimismo, se señala que el Juzgador podrá disponer, individual o concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad, las siguientes medidas:

- a) Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas personas de la Sala de Audiencias cuando afecten el orden y el decoro del juicio;

- b) Reducir, en ejercicio de su facultad disciplinaria, el acceso de público a un número determinado de personas, o, por las razones fijadas en el numeral anterior, ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas;
- c) Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación, grabadoras, o cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica de imágenes, sonidos, voces o similares, siempre que considere que su utilización puede perjudicar los intereses de la justicia y, en especial, el derecho de las partes.

De igual forma se señala que los juicios sobre funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos; y finalmente que la sentencia será siempre pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.

1.2.4.3. Inmediación

Guerrero (2005) refiere que:

“Este principio alude a la importancia de que el juzgador aprehenda el conocimiento directo que deviene de la actividad probatoria y así logre formar su convicción frente al caso propuesto. Es aquella posibilidad que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal” (p. 153)

El juez percibe de manera directa la actividad probatoria que se desenvuelve en juicio y de acuerdo a la percepción obtenida y la convicción creada emitirá a resolución que considera emana directamente de lo presenciado y apreciado por su autoridad. Según Roxin (2000), el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, las que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral (p. 395)

1.2.4.4. Contradicción

Vázquez (2004) señala que:

“La contradicción está referida a la posibilidad que tienen las partes para expresar sus alegaciones, aportar pruebas y participar en el debate probatorio, así como elaborar la argumentación final o alegatos anteriores a la sentencia” (p. 409)

El principio de contradicción como lo refiere Neyra (2010):

“Guía básicamente todo el desarrollo del juicio oral, pero esencialmente la actividad probatoria, pues otorga la posibilidad a los sujetos procesales de realizar sus planteamientos, aportar pruebas, discutirlos, debatirlos, realizar las argumentaciones iniciales, finales y realizar opiniones ante cuestiones incidentales” (p.335)

1.2.5. El debido proceso penal

La “constitucionalización de las garantías procesales” surgen durante la segunda mitad del siglo XX, tras la segunda guerra mundial, con la finalidad de asegurar a través de los textos constitucionales, en el ámbito nacional, y de tratados y convenios sobre derechos humanos en el ámbito internacional, un mínimo de garantías a favor de las partes procesales, que deben regir cualquier modelo de enjuiciamiento.

El garantismo procesal implica la puesta en práctica de las garantías que las leyes procesales instauran en contraposición al autoritarismo procesal, el cual ha generado una cultura autoritaria en la configuración de los procesos, creando sistemas inquisitoriales o mixtos que fueron adoptados en la mayoría de países latinoamericanos por largo tiempo.

El debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.

Fernández (1994) señala que:

“El debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros tantos derechos (p. 9258)

1.2.6. El derecho de defensa

1.2.6.1. Definición

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.º, inciso d), establece que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

Por su parte la Constitución Política del Perú en su artículo 139 inciso 14 señala como uno de los principios de la función jurisdiccional el de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

Sobre el concepto de derecho de defensa, Finzi (1973) señala que: “En un sentido general, prejurídico y natural el verbo defenderse significa rechazar por sí mismo una agresión. La defensa se vincula así a un mecanismo elemental de actividad instrumental necesaria en la lucha por la supervivencia” (P. 760)

Por otra parte, un concepto amplio en el marco del Derecho Procesal, el derecho de defensa se configura como la posibilidad de desarrollar “toda la actividad precisa para contribuir a eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha hecho recaer sobre una determinada persona. Y más especialmente, como el derecho del imputado a la tutela de su libertad, cuando pretende la observancia de las normas que evitan la lesión del propio derecho a la libertad” (Moreno, 1982, p. 24)

Montero (1997) señala que el Derecho a la Defensa es: “El derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial” (p. 141)

Gimeno (1988) refiere que:

“El derecho de defensa es un derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le puede atribuir la comisión de un

hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano” (p. 89)

Fairen (1969) refiere que:

“El derecho de defensa como garantía de un debido proceso penal comprende otros tantos derechos derivados, tales como conocer los fundamentos de la imputación, y, si el imputado se halla detenido, los motivos de su detención, a fin de que pueda ejercer su defensa de manera eficaz y logre recobrar su libertad lo más pronto que sea posible” (p. 1245)

El Tribunal Constitucional, ha establecido en el Exp. N° 0129-2005-HC/TC. FJ. N° 3. Caso: María Luisa Cotillo Aliaga, que:

“El derecho de defensa es un elemento del debido proceso, reconocido expresamente en el artículo 139°.14 de la Constitución. Como lo ha señalado el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. El derecho de defensa implica el derecho de conocer en su integridad los cargos formulados en contra del justiciable, ya que solo así es posible ejercer

la defensa de una manera idónea y eficaz. Esto concuerda con lo establecido en el artículo 14°.3,a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual “toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. Así mismo, La Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8°.2,b), reconoce “el derecho de toda persona a la comunicación detallada de la acusación formulada en su contra”

En otro pronunciamiento el Tribunal Constitucional ha señalado: “... que el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso constituye una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial sea realizado con arreglo al debido proceso... el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, en su artículo IX del Título Preliminar, establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formula en su contra y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”. A partir de dicha redacción se advierte que se supera la redacción estipulada en el ya mencionado artículo 121 del Código de Procedimientos Penales, ya que se prohíbe la posibilidad de que la persona pueda prescindir de abogado defensor desde que es citada o detenida, adoptando una perspectiva más amplia del derecho de defensa que es compartida por este Tribunal.

1.2.6.2. Modalidades del derecho de defensa

El derecho de defensa admite dos modalidades, la defensa material que la realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad policial, fiscal o judicial, y, la defensa técnica, que ha de ser ejecutada por un abogado elegido por el imputado, caso contrario, el órgano jurisdiccional le designará un Defensor de Oficio.

Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC. Exp. N° 6260-2005-HC/TC, caso Margi Clavo Peralta, ha señalado que “El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos casos se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión”.

La defensa en sentido amplio o material es la “actividad procesal dirigida a hacer valer ante el juez los derechos subjetivos y los demás

intereses jurídicos del imputado” (Manzini, 1951, p. 572) y es una función pública que se debe concebir como la destinada a orientar y ayudar a los justiciables en los procesos.

Asimismo la defensa material consiste en el derecho del imputado a realizar su propia defensa: contestando la imputación, negándola, manteniéndola en silencio o allanándose a la pretensión punitiva del Ministerio Público. Así, el Tribunal Constitucional define a la defensa material como el derecho del imputado de ejercer su propia defensa (Cfr. Exp. N° 1323-2002-HC/TC. FJ. N° 2. Caso: Silvestre Espinoza Palomino).

Por su parte la defensa en sentido estricto, es decir, en cuanto se contrapone a la acción penal ejercida por el ministerio fiscal, se efectúa mediante actos del imputado o del defensor que se pueden distinguir en defensas propiamente dichas y excepciones (Manzini, 1951, p. 572).

Se trata de introducir la igualdad de armas porque el acusador conoce profesionalmente el derecho material y procesal y por lo tanto se reconoce al inculcado la posibilidad de elegir su defensor cuya misión consistirá en aportar y hacer valer en el proceso todas las circunstancias y puntos de vista favorables al procesado (Gómez & Herce, 1987, p. 83)

En ese sentido, la defensa técnica es una exigencia necesaria en el proceso penal, como la actividad que realiza el abogado para asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos, controlar la legalidad del procedimiento, realizar el control crítico de la producción de las pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho, o recurrir a las resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional define a la defensa técnica como el asesoramiento y patrocinio por un abogado mientras dure el caso penal (Cfr. Exp. N° 1323-2002-HC/TC. FJ. N° 2. Caso:

Silvestre Espinoza Palomino)

De lo señalado se advierte que el derecho de defensa puede manifestarse de dos modos reconocidos en las disposiciones estudiadas. Por un lado, es posible que el imputado decida realizar una serie de actividades defensivas por sí mismo. Por otro, el imputado puede optar por confiar a un abogado la tarea de defenderle en un proceso penal.

Ambos (2005) refiere que esta distinción dará lugar a que en ciertos casos el defensor y el imputado puedan ser considerados como una unidad (p. 83)

1.2.6.3. El derecho de defensa en el Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal reconoce expresamente el derecho a la defensa como uno de sus principios fundamentales en el artículo IX del Título Preliminar “toda persona tiene derecho inviolable e

irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un Abogado de oficio, desde que es citada o detenido por la autoridad.” El proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos que corresponden a la persona agraviada por el delito.

Los Pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como el “derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor.

Según el Art. IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, el derecho de defensa implica los siguientes derechos para el imputado.

A que se le informe de sus derechos. Derecho que asiste tanto al detenido, al imputado, al investigado o acusado, pues se le debe de informar de los derechos que le asisten como tal, sea cual fuere el estadio del proceso penal.

A que se le comunique la imputación en su contra. El detenido, investigado y acusado tiene derecho a que se le traslade la imputación que recae en su contra.

En ese sentido el Art. 71.2 del Código Procesal Penal prescribe que “Los jueces, los fiscales o la policía nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda.

En el caso del detenido el Art. 139 Inc.15) de la Constitución Política prescribe que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las razones o causas de su detención. La causa de la detención debe consistir en una comunicación clara, precisa y oportuna.

A ser asistido por abogado defensor. Consiste en el derecho del imputado a ser asistido por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde el momento mismo en que es citado o detenido por la autoridad. El abogado defensor no solo ayuda con sus conocimientos jurídicos especializados en la resolución del conflicto sino que también representa al imputado a lo largo de todo el proceso, salvo en el caso que la ley procesal demanda la participación directa del imputado.

A tener un tiempo razonable para la defensa. El imputado durante la investigación y el juicio debe contar con el tiempo necesario o razonable para preparar su defensa, el cual dependerá de la gravedad

del delito, las dificultades para obtener evidencias a favor de la defensa, en número de personas acusadas en el mismo proceso, entre otros,

A ejercer su autodefensa. La autodefensa conocida también como defensa material o intervención directa del imputado está encaminada a que este haga valer por si mismo los derechos que le asisten y rige desde la investigación preliminar hasta la culminación del proceso.

A intervenir en la Actividad Probatoria. El imputado tiene la facultad para intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes, de conformidad con los principios y garantías constitucionales a las que se ha hecho referencia en la presente investigación. La intervención del imputado la puede realizar personalmente o a través de su abogado defensor. Si la realiza personalmente puede solicitar la admisión de pruebas.

Asimismo el Código Procesal Penal de 2004, admite en su articulado diversas manifestaciones del derecho de defensa del imputado, entre éstas tenemos:

a) Información de sus derechos y de la imputación: Artículos 71° y 87°; b) El ejercicio del derecho de defensa desde las investigaciones preliminares, Art.71.2.; c) Defensa material y técnica, Art. 71°.1.; d)

Derecho a acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria; e) El abogado defensor goza de todos los derechos, Art. 84; f) Intervención del abogado defensor en la actividad probatoria, Art. 84°, incisos 3 a 5; g) Nulidad absoluta de una actuación procesal, si no hubo abogado, Art. 150°, literal “a”; h) Nulidad absoluta de una actuación procesal, por inobservancia del contenido esencial de derechos constitucionales, Art. 150°, inciso “d”.

1.2.7 Derecho a la Defensa Técnica Eficaz

1.2.7.1 Generalidades

Mendoza (2020) señala que lo que se desea de una defensa técnica, realizada por un abogado, es que en la etapa en la cual se encuentre el proceso y muy a expensas del resultado final, éste proceda a ejecutar una contradicción u oposición contundente a la imputación, con una sólida base jurídica, técnica y argumentativa.

Si bien es cierto la defensa técnica eficaz como principio – derecho no se encuentra positivada en el ordenamiento jurídico peruano, no obstante, tenemos que forma parte del Derecho de Defensa, consagrado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, así como en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal que prevé el derecho de ser asistido por un abogado defensor de libre elección o de oficio y con lo que se garantiza la plena igualdad en la actividad probatoria.

Este principio tiene como bases a los principios de igualdad de armas recogido en el artículo 1.3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal y el principio de Contradicción, consustancial a la defensa.

1.2.7.2. Características

i. La defensa debe ser real:

Ore A. (2016) señala que:

“El derecho de defensa no se limita a la mera intervención formal o nominal del abogado para que actúe en resguardo de los intereses del Estado, sino que comprende el derecho a ser asistido con un mínimo de eficacia” (p. 155)

Por tanto la defensa técnica debe ser activa y dinámica y no una actividad formal, estática o de simple acompañamiento.

ii. La defensa debe ser permanente:

Arenas (2008) considera que:

“La defensa es un derecho fundamental y una garantía constitucional, y por tanto derecho irrenunciable e inalienable, tiene que ser total, o sea, plena, continua y permanente durante toda la actuación procesal: diligencias preliminares, investigación y juzgamiento” (p. 82)

Mayta (2017) señala que:

“No puede existir defensa eficaz si no se abarca todas las etapas y actuaciones procesales donde se ventilen cuestiones de interés para el procesado, por lo que resultan inválidos los actos en los cuales no haya habido, por lo menos, emplazamiento para la concurrencia del abogado” (p. 127)

iii. La defensa debe ser diligente

Señala Mendoza (2020) que:

“El abogado debe ser proactivo y debe ostentar un conocimiento profundo del caso que le toca patrocinar, tanto de la imputación como de los elementos de cargo y descargo de su defendido, para que lo tenga en cuenta y estructure su teoría del caso y su estrategia de defensa, aporte en la etapa correspondiente los elementos de descargo que tuviere, interponga los recursos respectivos dentro del plazo legal y realizar una correcta argumentación en todas sus intervenciones, para lo cual debe estar dotado de conocimientos previo a nivel fáctico, jurídico, lógico, probatorio y conocer las técnicas de litigación oral”. (p. 180)

Sobre lo mismo Hernández (2013) considera que la defensa debe estar en la potencialidad de investigar y averiguar sustantivamente en las mismas condiciones que lo hace el Ministerio Público.

iv. La defensa debe ser crítica

Refiere Pico (2008) que “la vigencia del derecho a la defensa asegura a las partes la posibilidad de sostener argumentalmente sus respectivas pretensiones y rebatir los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de las suyas” (p. 102)

En ese sentido la defensa debe llevarse con una estrategia que le asegura la generación de una contradicción y la acusación y rebatir de manera argumentativa la imputación.

v. La defensa debe ser suficiente

Maier (2004) señala que.

La defensa implica una garantía que logra asegurar al imputado las mismas facultades que las otorgas al Fiscal para influir en la reconstrucción de los hechos y para influir en la decisión final, lo cual se convalida a partir de las siguientes herramientas:

- a) El control de la prueba que analizará el juzgador en el fallo.
- b) Generación de prueba de descargo.
- c) La valoración probatoria
- d) La valoración jurídica del comportamiento que en el debate se reconstruye. (p. 585-588)

1.2.7.3. El rol del juez en cuanto a la defensa eficaz

Conforme al artículo 1.3 del Título Preliminar del Código Procesal

Penal se tiene que se le ha encargado al juez conservar el principio de Igualdad Procesal, debiendo quitar las trabas que obstaculicen su vigencia.

Al respecto existen dos posturas sobre la injerencia del juez cuando verifique que el defensor incumple su papel de forma eficaz, como parte de su función de asegurar el Principio de Igualdad de Armas.

La primera posición implica que el juez no tiene la facultad de calificar la actuación del abogado defensor, ya que ello atentaría contra la independencia y la libertad en el ejercicio de la defensa, lo que implicaría una intromisión del juez en el rol del abogado defensor.

La segunda postura considera, en sentido contrario, que el juez debe adoptar un rol activo e intervenir cuando advierta que el abogado no cumple con llevar a cabo una defensa eficaz.

Consideramos que es la segunda posición la que asegura en forma óptima la vigencia del derecho de defensa y el principio de igualdad de armas, no obstante la injerencia del juez tiene que estar condicionada solo para aquellos casos en donde la ausencia de las condiciones o presupuestos de la defensa eficaz sea grave y manifiesta, ya que de lo contrario se vulneraría el ejercicio libre de defensa y el equilibrio que debe sostenerse en la dinámica del proceso, lo que incluso podría afectar a la imparcialidad del juez.

1.3. Variables

1.3.1. Variable Independiente

Derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales

1.3.2. Variable dependiente

Estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación

1.4 Operacionalización de Variables

Variables	Definición de la Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Variable Dependiente: Derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales	Debe ser entendida como que implica la defensa de su interés procesal en función del acopio, registro, presentación y actuación de medios probatorios en las diferentes etapas del proceso penal	Teórica: Derecho procesal penal	Conocimiento del caso Conocimiento de la norma jurídica Conocimiento del acopio probatorio Conocimiento de la jurisprudencia	Análisis de datos Fichaje

Variable Independiente Estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación	Debe ser entendida como la posición de la defensa frente a la acusación del Ministerio Público, asumiendo posición de contradicción, aceptación, o aceptación parcial.	Teórico-práctico: Estrategias de Litigación oral penal	Defensa positiva Defensa negativa Defensa mixta Sin defensa	Análisis de datos Fichaje
---	--	---	--	------------------------------

1.5 Hipótesis

Si es que se garantiza el cabal ejercicio del derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales entonces la misma se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019.

Capítulo II

Métodos y Materiales

2.1 Tipo de Investigación

La investigación que pretendemos realizar versa sobre uno de los problemas más sensibles que se presentan en el ámbito del juzgamiento oral dentro del proceso penal: *“el hecho mismo del reconocimiento de la garantía procesal de todo procesado a contar con una defensa eficaz, que implica la defensa de su interés procesal en función del acopio, registro, presentación y actuación de medios probatorios en las diferentes etapas del proceso penal”*. Su desarrollo implica abordar, por un lado, el contenido del entendimiento de lo que es en realidad una defensa técnica eficaz en un proceso penal, y, por otro lado, la decisión que en base a trabajo pueda realizar el profesional lego para presentar la defensa de su patrocinado en base a los hechos atribuidos, la norma penal y los medios probatorios correspondientes.

Por esto se pretende desarrollar un trabajo que partiendo de elementos teóricos contenidos en las variables presentadas, se obtenga una respuesta frente al problema presentado. Un estudio de ese tipo conlleva a que la de investigación a desarrollar sea de Tipo Descriptivo – Explicativo, que se ubica en el presente caso dentro de la línea de investigación en el Derecho procesal penal.

2.2 Método de Investigación

2.2.1. Método descriptivo

Se utilizó para describir la información porcentual necesaria para la fundamentación de la variable independiente, que es objeto de estudio.

a) MÉTODO EXPLICATIVO

Este método permitirá establecer cuál es el contenido de la utilización del contenido de la variable independiente y dar a conocer de qué manera se relaciona con la variable dependiente.

b) MÉTODO INDUCTIVO

Este método permitirá analizar los datos que serán el instrumento de cotejo, luego de analizar cada aspecto de la valoración que realice el juez penal en su sentencia, al valorar los aportes de los sujetos procesales, la demostración de su teoría del caso, entre otros aspectos.

c) MÉTODO DEDUCTIVO

Este método permitirá ir de lo general a lo específico, y operará cuando de las conclusiones a las que se arribarán con el tratamiento de los datos, nos permitirán comprobar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación.

d) MÉTODO ANALÍTICO

Se va a aplicar este método en específico cuando corresponda analizar cada sentencia que forma parte de la muestra, y que permitirá pormenorizar los criterios de los jueces penales al resolver los casos que se le presenta.

e) MÉTODO DE SÍNTESIS

Mediante el empleo de este método se puede llegar a conclusiones parciales a partir del análisis de las sentencias condenatorias, para luego establecer aquellas

características comunes que permitirán arribar a conclusiones generales, como parte del trabajo de investigación.

2.3 Diseño de Contrastación

Se considera el diseño descriptivo o de una sola casilla

$$M1 = O1$$

$$M2 = O2$$

Donde,

M: es el conjunto de información que se recogerá de las resoluciones judiciales y decisiones adoptadas, de la bibliografía y normas jurídicas.

O: es la Ficha de análisis que se aplicará para recoger la información.

= Es la relación que se establecerá a partir de la comparación entre las muestras.

2.4 Población, Muestra y Muestreo

La población está formada por el total de sentencias condenatorias impuestas durante el año 2019 en los juzgados penales de Chiclayo.

De dicha cantidad, se está seleccionando una muestra ascendente a 20 casos distribuidos de la siguiente manera:

- Sentencias condenatorias que sean originadas en el año 2019

- Sentencias condenatorias que se dicten en el año 2019

TABLA N° 01:

MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA FICHA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Aspectos Casos	Frecuencia	Porcentaje
Actas de control de acusación 2019	10	50
Actas de control de acusación de 2020	10	50
Total	20	100

Año: 2021 Fuente: De investigación

2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos

2.5.1. Técnica del Fichaje

Mediante esta técnica se recogerá los datos teóricos, de opinión y de comentario de los textos nacionales y extranjeros.

Se usarán como instrumentos las fichas bibliográficas, textuales y de comentarios, fichas linkográficas, entre otros.

2.5.2. Técnica del Análisis de Documento

Esta técnica se ha de emplear para cotejar la información teórica con el contenido de las sentencias que se van a analizar. El instrumento se expresará mediante una ficha de cotejo.

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos

Para este trabajo de investigación, se considera tratar los datos aplicando frecuencias simples y frecuencias porcentuales, y esto debido a la cantidad de la muestra que se pretende estudiar.

Capítulo III

Resultados

3.1. Presentación de resultados

Luego de haber analizado los casos planteados a partir de las Actas de audiencias de control de acusación, que representan los documentos más cercanos para observar lo que ocurre en audiencias de control de acusación, se puede establecer la siguiente tabla

Tabla N° 02
Convocatoria audiencia

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Asistencia del Ministerio Público	20	100
Asistencia del abogado defensor acusado	20	100
Asistencia del acusado	08	40
Total	30	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

De la lectura de la Tabla N° 02, se advierte que en el presente caso, tanto en el 100 por ciento de los casos analizados, se advierte que estuvieron presentes el Ministerio Público pero también los abogados defensores de los acusados, y esto se entiende porque no se puede realizar la audiencia de control de acusación sin la presencia del letrado patrocinados del procesado ni tampoco del fiscal provincial penal, garantizando con la presencia de aquel el ejercicio formal del derecho de defensa.

Un ejemplo de lo expuesto lo encontramos en el siguiente caso que ahora se indica, como tenemos en:

“II.- ACREDITACIÓN.

Fiscal: Dra. Gasdaly Salazar Alarcón, Fiscal Adjunta Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, con domicilio procesal en la calle Virrey Toledo S/N de José Leonardo Ortiz.

Casilla Electrónica: 73922.

Abogado de la defensa: Dr. Miguel Sebastian Chafloque Chafloque con ICAL N° 659, Casilla Electrónica: 3011

Imputado: Juan Alvarado Calle con DNI N° 16523225 con domicilio real en UPIS Santa Lucia Mz K lote 03 - José Leonardo Ortiz”.¹

Por otra parte, en el 40% de los casos analizados se advierte que no se ha encontrado presente el acusado, lo que implica que si bien es cierto es recomendable que los procesados concurren a todos los actos procesales, sin embargo en este caso su presencia no es obligatoria en la medida en la que estamos frente a una actuación de defensa técnica, en la que la participación y presencia de las partes se expresa a través de los actos expositivos y de defensa de parte del abogado.

Ejemplo de estos casos se advierte en los siguientes aspectos.

“II.- ACREDITACIÓN.

Fiscal: Dr. ROBER EDWIN BECERRA PÉREZ, Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, con domicilio procesal en la calle Virrey Toledo S/N de José

¹ Expediente : 3006-2019-0-1706-JR-PE-1°

Leonardo Ortiz.

Casilla Electrónica N° 44122. Correo: roberedwin10@gmail.com

Abogado de la agraviada: Dr. JUAN ANDRES VASQUEZ GARCIA, con ICAL N° 7355, con Casilla Electrónica: 67096, con domicilio legal en Calle Eufemio moya N° 364- Chiclayo, correo: chota0505@gmail.com

Abogado de defensa: DANIEL CONSTANTINO ESPINO, con domicilio procesal en Calle cabildo N° 136 - JLO., Casilla Electrónica: 29113, correo electrónico: constantino.vd10@gmail.com”²

Tabla N° 03

Observación de la acusación

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
En delitos graves	16	80
En delitos con penas efectivas	16	80
En delitos con penas suspendidas	--	--
Total	20	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

² Expediente : 5557-2019-0-1706-JR-PE-2°

Del contenido de la Tabla N° 03, se puede apreciar que en el presente caso un total de 16 casos observa la acusación lo que en delitos graves representa un total de 80 por ciento, debiéndose entender delitos graves como robo agravado, corrupción de funcionarios, etc. Un total de 16 observa la acusación de manera formal de delitos con pena efectiva, lo que equivale a un 80 por ciento. Lo singular del caso es que un total de cuatro casos no observa de manera formal el requerimiento de acusación, lo que supone que se encuentra conforme con dicho pronunciamiento, o por lo menos formalmente no lo considera necesario, lo que implica un porcentaje del 20 por ciento, que se refiere a delitos en los que se impone pena privativa de la libertad.

La tabla nos muestra como a pesar de que en los delitos graves y aquellos que sin serlos se impone pena privativa de la libertad efectiva, se advierte que en efecto estamos frente a procesos en los que mayoritariamente no se observa formalmente la acusación, lo que significa que en buena parte de los casos analizados no se produce ningún cuestionamiento ni formal ni de fondo al contenido de los requerimientos incriminatorios de parte de las fiscalías provinciales penales.

Frente a esto entonces corresponde preguntarse, si es que no se observa la acusación, acaso no se pudo concluir el proceso mediante el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio o en todo caso, a través del proceso especial de terminación anticipada, procedimientos que en todos los casos implica se negocie las penas con aplicación de la reducción de las mismas?

Presentamos a continuación ejemplos de dichas observaciones:

“III.- DEBATE:

Juez: Da por instalada la audiencia y otorga el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento acusatorio. (Queda registrado en audio).

Fiscal: Sustenta su requerimiento acusatorio, narrando los hechos y elementos de convicción, por lo que solicita la pena de cuatro años un mes y diez días de pena privativa de libertad; y la suma de S/1,190.00 mil ciento noventa soles por concepto de reparación civil. (Queda registrado en audio).

Abogado del imputado: Hace observaciones formales a la acusación fiscal y solicita el sobreseimiento de la causa de conformidad al artículo 344 numeral 2 inciso d del código penal. (Demás argumentos se registra en audio).

Fiscal: Interviene, hace su réplica, indicando que el imputado de autos tiene una sentencia por el mismo delito en otro juzgado, por lo que se opone al sobreseimiento solicitado. (Queda registrado en audio)³.

Tabla N° 04
Observación material de la acusación

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Errores de tipeo o redacción	08	40
Errores materiales	10	50
Errores sobre el fondo	12	60
Total	20	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

Por errores materiales, se debe los diversos cuestionamientos que se realizan de manera general de parte de las defensas de los acusados al requerimiento hecho por el representante del Ministerio Público. Del contenido de la Tabla N° 04, se puede apreciar que el 40 por ciento de casos, realiza observaciones que tienen que ver con errores de tipeo, escritura, que muy bien pueden ser corregidos en el acto de la audiencia de control, y en el auto de enjuiciamiento.

Por otra parte, el 50 por ciento refiere que la acusación tiene errores materiales como por ejemplo considerar sucesos no previstos en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, o es el caso de presentación de calificación jurídica que no está comprendida dentro de la investigación propiamente dicha.

De igual manera, se debe precisar que el 60 por ciento refiere que la acusación contiene errores que refieren medios probatorios no previstos en la investigación preparatoria, o que varían el título de imputación que marcan no un error, sino más bien un replanteamiento de la teoría del caso de parte del Ministerio Público, aspecto no considerado desde el inicio del proceso penal.

Un ejemplo de las observaciones en los casos que se viene analizando, lo encontramos en el siguiente caso:

“III.- DEBATE:

Juez: Da por instalada la audiencia y otorga el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento acusatorio. (Queda registrado en audio).

Fiscal: Sustenta su requerimiento acusatorio, narrando los hechos y elementos de convicción, por lo que solicita la pena de cuatro años un mes y diez días de pena privativa de libertad; y la suma de S/1,190.00 mil ciento noventa soles por concepto de reparación civil. (Queda registrado en audio).

Abogado del imputado: Hace observaciones formales a la acusación fiscal y solicita el sobreseimiento de la causa de conformidad al artículo 344 numeral 2 inciso d del código penal. (Demás argumentos se registra en audio)”³

³ Cuaderno : 3494-2019-0-1706-JR-PE-2°

Como ejemplo de algún caso en el que no se formula observación alguna, se presenta el siguiente caso:

“III.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

MINISTERIO PÚBLICO, Sustentó su Acusación Fiscal, narro los hechos, preciso los elementos de convicción que sustentan su requerimiento acusatorio, así como solicito la pena y el monto de la reparación civil. Teniéndose por ofrecidos sus medios probatorios. (Se registró en audio)

Se desistió: de la Pericia del Dr. Perito Aurelio Barboza Bancayan.

ABOGADO DE LA DEFENSA: No formula observación y en merito a la comunidad de la prueba se ofrecen los mismos medios probatorios que presento la representante del Ministerio Público. (Se registró en audio”)⁴

Tabla N° 05

Observación sustancial de la acusación

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Sobre los hechos	4	20
Sobre la calificación jurídica	2	10
Sobre el quantum de la pena	8	40
Sobre la reparación civil	4	20

Total	20	100

Año	2021	

⁴ EXPEDIENTE : 01759-2016-0-1706-JR-PE-08

Fuente de investigación propia

De la tabla N° 05, se puede concluir que el 20 por ciento realiza observaciones sobre los hechos, lo cual implica negación de los sucesos fácticos postulados por el Ministerio Público, o en todo caso proponer hechos que difieren de los postulados por el fiscal provincial penal de tal manera que se presentan acontecimientos diferentes que deben ser verificados al momento del juicio oral.

Asimismo, un porcentaje equivalente al 10 por ciento cuestiona la calificación jurídica proponiendo una de naturaleza diferente pero que termina beneficiando a sus defendidos. Frente a esto, encontramos que en un porcentaje del 40 por ciento formula observaciones a la pena proponiendo a su vez penas de menor sanción penal, o en casi todos los casos una de naturaleza privativa de la libertad pero suspendida en su ejecución, con aplicación de las reglas de conductas, o en otros casos penas menores.

Un reducido 20 por ciento se refiere a cuestionar el monto de la reparación civil, lo que para el mayor porcentaje de casos implica que se observa con la finalidad de que la reparación civil sea una de un quantum menor a la propuesta por el Ministerio Público.

Un ejemplo del cuestionamiento sustancial a la acusación lo tenemos en el presente caso:

“III. DEBATE:

3.1. ACUSACIÓN Y MEDIOS PROBATORIOS

FISCAL: Sustenta su requerimiento acusatorio, exponiendo los hechos materia de investigación, los elementos de convicción con los que cuenta así como la pena y reparación civil que solicita imponerse al imputado. Asimismo ofrece como medios probatorios la testimonial y documentales consignadas en su requerimiento acusatorio escrito (Se registra en audio).

ABOGADO DEL IMPUTADO BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA:

DR. ELVIS QUIROGA ODIAGA: Observa la acusación de manera formal y asimismo solicita el sobreseimiento. Asimismo, ofrece medios de prueba.

ABOGADO DEL IMPUTADO JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES; DR.

ALVARO JULCA DÍAZ: Observa formalmente la acusación, asimismo ofrece medios de prueba por el Principio de la Comunidad de la Prueba respecto a ciertas declaraciones. (Grabado en audio)

ABOGADO DEL IMPUTADO SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO:

DR. DUBERLI BELICO SANCHEZ: Observa la acusación de manera formal y asimismo ofrece medios de prueba. (Grabado en audio).

PROCURADOR PÚBLICO: Solicita la suma de CINCO MIL SOLES por concepto de Reparación Civil. (Grabado en audio)”⁵.

Tabla N° 06

Presentación de medios de defensa

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Excepción de improcedencia de acción	06	30
Excepción de prescripción	02	10
Total	20	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

⁵ Expediente : 12153-2019-0-1708-JR-PE-01

Con respecto a los medios de defensa ante la acción penal, la Tabla N° 06 nos presenta que entre los medios de defensa presentados por las defensas de los procesados predominan las excepciones de improcedencia de acción y en menor cantidad las excepciones de prescripción. Si se observa la mencionada tabla se podrá apreciar que el 40 por ciento de casos se refiere a la excepción de improcedencia de acción, y que en el 30 por ciento se refiere a las excepciones de prescripción y excepción de improcedencia de acción, lo que supone que aunque en menor proporción, se hace uso de estos mecanismos procesales que se advierte se presentan en los casos analizados.

Un dato interesante es que en todos los casos que se presentaron los medios de defensa que se indicaron, las resoluciones judiciales denotan que no fueron amparados, es decir, se les rechazó por parte del órgano jurisdiccional, lo que revela que si bien el derecho de accionar está reconocido, es cierto también que debe ejercerse con la seguridad de que se va a obtener un resultado que favorezca en derecho a quien lo solicita.

Tabla N° 07: Presentación de pedido de sobreseimiento

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Peticionan sobreseimiento	08	40
No peticionan sobreseimiento	12	60
Total	20	100
Año	2021	
Fuente de investigación propia		

Otro de los aspectos que tiene que ver directamente con la etapa intermedia, específicamente con el control de acusación, es el del pedido de sobreseimiento que formulan los abogados de los procesados. Como se conoce, con esta solicitud se busca de sobremanera poner fin al proceso por las razones establecidas en el artículo 345 del Código Procesal Penal.

Sin embargo de la observación de la Tabla N° 07, se puede leer que del total de casos estudiados, el 40 por ciento formula requerimiento de sobreseimiento, mientras que el por ciento no lo realiza. Esto implica en buena cuenta que si bien debe ejercerse los medios defensa que la norma procesal adjetiva considera, es cierto también que dicho ejercicio deberá efectuarse cuando resulte viable o procedente la petición, por cuanto todos los casos en los que solicitó sobreseer la causa, fueron rechazados por el juzgado penal.

“III.- INICIO DEL DEBATE:

En este estado la Señora Juez, concedió el uso de la palabra a las partes, a fin de que fundamente sus pretensiones:

Ministerio Público: Sustentó y oralizó su acusación fiscal, narrando los hechos, precisando los elementos de convicción que sustentan su requerimiento acusatorio, postulando la pena, Así mismo ofreció sus medios de prueba. (Se registró en audio).

Juez: Pregunta que al fiscal aclare el tipo penal. (Se registró en audio).

Ministerio Público: Refiere que es el artículo 122-B inciso 7) del Código Penal. (Se registró en audio).

Defensor del imputado: No Observó la acusación, y no realizó oposición a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, pero si solicita el sobreseimiento, no ofrece medios de prueba. - (Se registró en audio)

Ministerio Público: Se opone al pedido de sobreseimiento, por cuanto si existe una declaración inculpativa por parte de la agraviada, lo cual es corroborado con el certificado médico legal. (Se registró en audio)”.⁶

Tabla N° 08

Cuestionamientos a los medios probatorios

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Realizan cuestionamientos	06	30
No realizan cuestionamientos	14	70
Total	20	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

De igual forma, un escaso 30 por ciento de casos estudiados cuestionan los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, mientras que otro porcentaje considerable equivalente al 70% no cuestiona ni la idoneidad, ni la utilidad, ni la legalidad, ni la licitud de los medios probatorios presentados por el representante del Ministerio Público.

Si bien es cierto que es una facultad de las partes contradecir los medios probatorios durante la etapa intermedia, lo cierto es que se tiene dos opciones para no hacerlo: a) que el contenido de los mismos no se relacione con los cargos formulados, y b) o que sencillamente

⁶ EXPEDIENTE : 8949-2019-0-1706-JR-PE-07

el contenido de los medios probatorios sea tan contundente que ni siquiera se tenga ánimo procesal de querer discutir por cuanto son irrefutables.

Un ejemplo de lo indicado, lo tenemos en el siguiente caso que se pasa a transcribir en:

“III. DEBATE:

3.1. ACUSACIÓN Y MEDIOS PROBATORIOS

FISCAL: Sustenta su requerimiento acusatorio, exponiendo los hechos materia de investigación, los elementos de convicción con los que cuenta así como la pena y reparación civil que solicita imponerse al imputado.

Asimismo ofrece como medios probatorios la testimonial y documentales consignadas en su requerimiento acusatorio escrito (Se registra en audio).

ABOGADO DEL IMPUTADO BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA:

DR. ELVIS QUIROGA ODIAGA: Observa la acusación de manera formal y asimismo solicita el sobreseimiento. Asimismo, ofrece medios de prueba. (Grabado en audio)

ABOGADO DEL IMPUTADO JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES; DR.

ALVARO JULCA DÍAZ: Observa formalmente la acusación, asimismo ofrece medios de prueba por el Principio de la Comunidad de la Prueba respecto a ciertas declaraciones. (Grabado en audio)

ABOGADO DEL IMPUTADO SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO:

DR. DUBERLI BELICO SANCHEZ: Observa la acusación de manera formal y asimismo ofrece medios de prueba. (Grabado en audio).

PROCURADOR PÚBLICO: Solicita la suma de CINCO MIL SOLES por concepto de Reparación Civil. (Grabado en audio)”⁷.

⁷ Expediente : 12153-2019-0-1708-JR-PE-01

Tabla N° 09
Presentan teoría del caso

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Por defensa positiva	06	30
Por defensa negativa	08	40
Por defensa mixta	04	20
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Total	20	100

Año 2021

Fuente de investigación propia

De la revisión de la Tabla N° 09, se advierte que un porcentaje del 30 por ciento propone una defensa positiva en sus casos, es decir, que si esto es así, cabe preguntarse por qué no propusieron una procedimiento de terminación anticipada. La consecuencia ante esto es que se origine un perjuicio en el procesado como es la de impedir que se acceda al derecho premial como es el de la rebaja del seis por ciento de la pena concreta.

Frente a lo expuesto, aparece un 40% por ciento realiza una defensa negativa o de contradicción lo que supone que se oponen a la presunción de inocencia y que corresponde en juicio determinar la responsabilidad penal sobre los cargos que se le imputan a los acusados; esto implica que junto a la teoría del caso de negación se acompañen medios probatorios que permitan en juicio oral demostrar la tesis de defensa.

Ante esto, el 20 por ciento de los casos, las defensas ofrecen una defensa mixta y cuestionan la reparación civil o en todos los casos que optan por aceptar los cargos y beneficiarse con la rebaja de pena, y sólo discutir los temas referidos a los extremos mencionados, lo que origina también que tenga la posibilidad de impugnar y recurrir a la segunda instancia.

Uno de los ejemplos que denota lo expuesto en la Tabla comentada, lo tenemos en el siguiente caso:

“ABOGADO DE LA DEFENSA: Que tanto en el Acta de denuncia verbal, como en el Acta de entrevista única, existen incongruencias, por parte del relato, de cómo sucedieron los hechos de la menor al igual que de la madre. Ya que al inicio la menor señala que el procesado le quito la ropa y la violó. Violación se entiende como la penetración del miembro viril, en la vagina, en el ano o en la boca de la menor y que ella fue corriendo a su casa, después en el Acta de entrevista Única, ella sostiene que estaba con ropa, por lo tanto de acuerdo a ese tipo de evidencias y ante las incongruencias que demuestra la menor, es que se está ofreciendo la declaración de la menor y de su madre.

Por otro lado, en el Acta de denuncia verbal de fecha cuatro de diciembre del año dos mil quince, mediante la cual la señora Fanny Lourdes Díaz Arboleda, denunció tocamientos indebidos realizados por Montalvo Villaseca Diego Ayrton en agravio de su menor hija de iniciales MACD, hechos que según la denunciante habrían ocurrido en el mes de febrero del año dos mil quince, donde en ese momento la señora manifiesta que su hija había sido sometida a violación sexual, mas no a tocamientos indebidos.

El Acta de Entrevista Única, realizado a la menor de iniciales MACD, de once años de edad, por parte de la Psicóloga de la División Médico Legal III de Lambayeque en presencia de la Fiscal de Familia, donde narra con precisión de los hechos imputados,

donde la menor cambia los hechos y da otra versión, diciendo esta vez que si se encontraba con ropa y no como lo había dicho anteriormente que el procesado le había quitado la ropa. *(Se registró en audio)*

JUEZ: Pregunta a la defensa si la finalidad es la contradicción. Y en cuanto a los peritos. *(Se registró en audio)*

ABOGADO DE LA DEFENSA: Indica que la finalidad si es la contradicción y que no va a ofrecer a ningún perito. *(Se registró en audio)*

JUEZ: Pregunta a la representante del Ministerio Publico si tiene algo que decir, respecto al ofrecimiento probatorio de la defensa técnica. *(Se registró en audio)*

MINISTERIO PUBLICO: Que indique la defensa porque en el acta de entrevista única dice que se cambian los hechos si no hay declaración previa, en todo caso lo que se va a evaluar es lo que se va a decir en juicio, porque recién en juicio se va a probar si existe o no contradicciones. *(Se registró en audio)*

JUEZ: Pregunta a la Defensa Técnica, donde hay contradicción. *(Se registró en audio)*

ABOGADO DE LA DEFENSA: Señala que hay contradicción en lo dicho con la madre. *(Se registró en audio)*

MINISTERIO PUBLICO: Manifiesta que no hay oposición. *(Se registró en audio)*⁸

Tabla N° 10

Presentan medios probatorios de parte

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Presentan medios probatorios	8	40

⁸ EXPEDIENTE : 01759-2016-0-1706-JR-PE-08

No presentan medios probatorios	12	60
<hr/>		
Total	20	100
<hr/>		
Año	2021	
Fuente de investigación propia		

De la lectura de la Tabla N° 10, se puede leer que sólo un 40 por ciento presentan medios probatorios, lo que por cierto es un porcentaje muy bajo que afecta la teoría del caso que refiere una negación de la propuesta del Ministerio Público o una propuesta para debatir el quantum de la sanción penal o de la reparación civil.

Lo expuesto resulta importante para el ejercicio de la defensa pues, si es que no voy a convenir con la propuesta del fiscal provincial penal, lo más recomendable es presentar medios probatorios que permitan discutir en mejores condiciones la inocencia del procesado, o la sanción penal a imponer o el monto de la reparación civil. Si es que esto no se consigue resultaría vano todo intento de acceder por completo del derecho premial.

La tabla asimismo nos muestra que el 60 por ciento de casos no presenta medios probatorios que favorezcan su pretensiones, y si bien pueden hacer cuestionamientos verbales lo cierto es que los mismos muchas veces resultan poco sustanciales para los efectos de la defensas de los acusados.

Al respecto, presentamos un ejemplo de los medios probatorios que se ofrecen en uno de los casos estudiados:

“3.2. SOBRE LOS MEDIOS PROBATORIOS

- FISCAL: Ofrece las declaraciones y las documentales consignadas en su requerimiento acusatorio. (Se registra en audio).
- ABOGADO DEL IMPUTADO: No se opone a los medios probatorios ofrecidos por la fiscal y ofrece como medios de prueba, por la defensa de sus patrocinados la certificación otorgada por el Pastor Misionera de la misión Evangélica Pentecostés Universal “Jehová es mi Pastor”, copia autenticada de la boleta de venta N° 0432553 de fecha 14 de marzo del 2012 y la declaración de don José Héctor Pizarro Baca que testificará referente a que Víctor Santamaría Peche el día 07 de abril del 2012 fue invitado a un ayuno familiar en el sede pastoral en un horario de 6 AM a 6PM.
- FISCAL: Se opone a las documentales ofrecidas por el abogado de la defensa toda vez que las certificaciones deben cumplir ciertas formalidades precisando además que dicha documental referente a la certificación no acredita que dicha persona estuvo efectivamente en ese lugar aquel día y que en la boleta de venta no se visualiza la fecha, no oponiéndose al testigo.

ABOGADO: Hace uso de su derecho a réplica. (Se registra en audio)

JUEZ: Precisa que las resoluciones se emitirán dentro del término de ley”⁹.

⁹ Expediente

: 3792-2012-0-1708-JR-PE-01

Tabla N° 11
Resultados de sentencias

Aspectos	Frecuencia	Porcentaje
Condenatorias		
Absolutorias		
Total	20	100
Año	2021	
Fuente de investigación propia		

De la Tabla N° 11 podemos advertir que el 100 por ciento de los casos analizados, es decir los veinte procesos, en ninguno de ellos las defensas pudieron obtener sentencias absolutorias, pues todas las resoluciones finales son condenatorias sin excepción. De esta se indica que el ciento por cien de los casos pudo haberse decidido por terminación anticipada, con lo que se tenía a favor de los sentenciados un pena del seis por ciento, lo que por cierto nos presenta el ejercicio de una defensa técnica que no dio resultado. Por otra parte en aquellos casos en los que se llegó a conclusión del juzgamiento por conformidad, se considera también que muy bien pudo acogerse a la terminación anticipada en la que se obtenía oportunidad de obtener derecho premial superior al siete por ciento que se obtuvo con la conclusión anticipada del juicio oral.

Capítulo IV

Discusión

4.1. Discusión de los resultados

Luego de analizar los datos que originan los resultados presentados en el capítulo anterior, comparando los mismos, se arriba a los siguientes resultados:

- a) En todos los casos analizados se aprecia que el órgano jurisdiccional ha cumplido con notificar a las partes con el escrito de acusación presentados por el representante del Ministerio Público, es decir se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal vigente, denotando además este acto que los sujetos procesales tuvieron conocimiento del inicio de la etapa intermedia del proceso penal.
- b) Asimismo, en la resolución que confiere el traslado de la acusación, se puede leer que se ha consignado que el plazo para absolver la misma es de diez días hábiles, pudiendo realizar las observaciones de ley y presentar nuevos medios probatorios, aspecto con el que a pesar de estar prescrito en la norma, se informa a las partes de la posibilidad de ejecutar su derecho de defensa.
- c) Además se puede verificar en todos los casos que el Juez de Investigación Preparatoria convoca a las partes a la audiencia de control de acusación, lo que debe entenderse como el cumplimiento formal de impulso procesal de oficio que tiene que realizar el director de la etapa intermedia.
- d) Del contenido del acta de la audiencia de control de acusación, se puede leer que el juez penal ha corrido traslado de la acusación escrita reproducida en audiencia oral por el representante del Ministerio Público, se verifica que ha dado el uso de la palabra a todas las partes, que han asistido a la audiencia preliminar al juicio, dejándose constancia en autos de los hechos relevantes.

- e) De igual manera se ha resuelto todas las articulaciones planteadas y se ha orientado el debate hacia las pretensiones de las partes, por lo que se considera que se el juez ha resuelto sin afectación del derecho defensa de los sujetos procesales.
- f) En conclusión, en el cuadro que se comenta se puede verificar que el juez de investigación preparatoria ha respetado el debido proceso, y con ello ha garantizado el ejercicio del derecho de las partes, al menos desde el punto de vista formal por cuanto ha resuelto conforme a lo solicitado en audiencia.

De igual manera, de los contenidos de las tablas anteriores, en las que se describe la forma cómo se asumió la defensa de los procesados, en los casos en los que hemos analizado, siendo el resultado el siguiente:

- a) Sólo 8 casos de 20 se observó los aspectos formales de la acusación, es decir, se cuestionó fundamentalmente errores gramaticales y errores de tipeo, en nombres y apellidos, omisiones como a qué Código pertenecían los artículos mencionados, entre otros aspectos que se tuvieron por aclarados en la audiencia de control de acusación.
- b) De los 20 casos analizados, hallamos que en 8 de ellos se solicitó sobreseimiento ante el pedido acusatorio del representante del Ministerio Público, y si bien es cierto que esto es ya un número alto de ejercicio de la defensa, es cierto también que ninguno de ellos prosperó en razón a que todos estuvieron referidos a determinar la inocencia de los acusados, razón por la que fueron desestimados estos pedidos.
- c) Cuatro de veinte casos cuestionan los hechos, y si bien es cierto que es un porcentaje bajo considerando la muestra, los cuestionamientos realizados se

refieren a que los procesados son inocentes de los cargos formulados por el Ministerio Público, y los argumentos que exponen están dirigidos a señalar que sus patrocinados no han estado en el lugar de los acontecimientos, cuando ocurrieron los mismos.

- d) Con respecto a la calificación jurídica en 2 casos se cuestiona la calificación jurídica, pero en el mismo sentido referido a que los procesados no son responsables del hecho materia de acusación, siendo desvirtuado este aspecto fácilmente por la participación fiscal, pues no se refiere a un cuestionamiento propio de los hechos de la acusación y las circunstancias concomitantes.
- e) Se cuestiona además el cuántum de la pena, en ocho casos, pero sin exponer argumento alguno referido a la determinación de la misma, además el cuestionamiento principal repetido nuevamente es la alusión a la inocencia de los procesados.
- f) Asimismo, se cuestiona también la reparación civil pero en sólo cuatro casos, y no tanto en atención a que si están o no conformes con el monto propuesto por el Ministerio Público, sino en atención a que sus patrocinados no son responsables de los hechos por lo tanto no aceptan monto alguno.
- g) Con relación a los medios probatorios, de igual forma sólo en dos casos los cuestionan, y esto en referencia también a la inocencia de sus patrocinados, sin que esto signifique de alguna forma cuestionamiento directo a la idoneidad, conducencia, pertinencia, legalidad, licitud de los medios probatorios, expresándose que los medios probatorios no desvirtúan el principio de inocencia de los procesados.
- h) En sólo ocho casos se presenta un teoría del caso de manera expresa y formalmente expuesta para realizar una defensa negativa; en todos los demás casos se hace una

defensa positiva o mixta pero sin concretizarse en una teoría del caso en particular, asumiéndose como la misma la negativa y alusión a la inocencia de los acusados.

- i) Debemos indicar también que sólo ocho casos aportan medios probatorios diferentes a los propuestos por el representante del Ministerio Público, y en ambos casos se refieren a la presentación de testigos, que nunca antes se habían ofrecido como elementos de convicción durante la etapa de investigación preparatoria
- j) En conclusión, se puede señalar que la actividad desarrollada por la defensa técnica de los acusados resulta ser mínima, repetitiva, escasa, e intrascendente, dejándose de lado una oportunidad para fortalecer el contradictorio y tener éxito en la defensa negativa que se va realizar en el juzgamiento.

4.2. Contrastación de la hipótesis

En el presente trabajo de investigación se formuló la siguiente hipótesis de trabajo:

Si es que se garantiza el cabal ejercicio del derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales entonces la misma se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019.

Frente a lo expuesto, se debe precisar:

- El ejercicio de la defensa técnica en el campo penal debe partir del interés que persiga el acusado, luego de que el Ministerio Público haya formulado el requerimiento en el que solicita declaración de responsabilidad penal, imposición de una sanción penal y fijación de un monto de la reparación civil.
- Lo anteriormente expuesto supone que la defensa técnica en la audiencia de control de acusación muestre la teoría de su caso que permita representar el interés de su patrocinado, que puede suponer

formulación de proposiciones absolutorias, formulación de proposiciones en las que se rebajan la pena, formulación de proposiciones en las que se disminuye el monto de la reparación civil.

- Ya no existe otra posibilidad que pueda beneficiar el interés del patrocinado, porque si está de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, muy bien pudo haberse arribado a una terminación anticipada del proceso que supone el acceso del procesado al denominado derecho premial equivalente a la reducción de un sexto de la pena a imponer.
- En los casos estudiados, se advierte que a pesar de que en teoría los señores abogados defensores conocen que en su actuar profesional deben de proceder a favor del beneficio del interés de su patrocinado, lo cierto es que no se revela de manera directa que en efecto procedan bajo esta finalidad.
- Lo expuesto, nos lleva entonces a la conclusión que el cabal ejercicio de la defensa técnica de los procesados debe estar en función de su interés personal como ciudadano, de tal manera que cuando se siente una posición de inocencia ante cargos fiscales, es porque se está en la posibilidad procesal real de que en efecto esto va a ser así.
- Lo expuesto implica entonces que las defensas aporten medios probatorios que permitan demostrar sus posiciones concretas, de tal manera que la postura procesal adoptada responda de esta manera al interés del defendido.
- Sin embargo, en los casos expuestos, en ningún de los casos analizados se advirtió que se haya privilegiado el interés de los acusados, fundamentalmente por cuanto ni siquiera se ofreció medios probatorios para contradecir la teoría del caso promovida por el señor fiscal provincial penal.
- En todo caso, el cabal ejercicio del derecho de defensa de los procesados deberá fundamentarse en hacer prevalecer el interés del defendido, de lo que se infiere que esto en efecto no prevaleció en los casos analizados.

- Entonces, si se garantizara el debido ejercicio del derecho de defensa de los acusados, entonces sería válida la estrategia del caso presentada en un proceso penal, con lo que queda demostrada la hipótesis de trabajo.

4.3. Propuesta de Lege Ferenda

4.3.1. Fundamento filosófico – legal de propuesta

El Estado peruano proclama siempre la vigencia del Principio del respeto a la dignidad humana, y es que en efecto, no se puede admitir vejación alguna en base a razones étnicas, sociales, religiosas, de origen, etc., sin que se haga diferencias entre las personas que han cometido algún delito y aquellas que están siendo procesadas penalmente.

Por ello consideramos que el:

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

De la Constitución Política del Perú, expresa el sentido del quehacer del Estado Peruano, en el que no hay diferencia por motivo alguno, incluso así la persona esté siendo procesado penalmente.

Esta apuesta por la persona aún en condiciones adversas, hace que el Estado respete precisamente la dignidad de lo que caen en el infortunio de ser procesados por un hecho delictuoso, pero también supone que le proporcione los medios para

ejercitar también la vigencia de dicha declaración, para que no se torne en un mero discurso alentador.

En el proceso penal, no sólo basta garantizar a los procesados el tener un abogado que lo defienda, sino que dicha defensa sea realmente eficaz y que le garantice un proceso en el que el contradictorio sea llevado a su máxima expresión. A través del ejercicio de la defensa, se garantiza también la prevalencia del respeto por la dignidad de la persona, entendiendo también que corresponde al Juez como funcionario público permitir que realmente el abogado defensor cumpla la función para la cual ha sido contratado o designado.

4.3.2. Fundamento constitucional de propuesta

El proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal¹⁰. En este sentido, dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial¹¹.

¹⁰ Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 117.

¹¹ Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 118

El Debido Proceso está contemplado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, como un principio – derecho de la función jurisdiccional, cuyo texto es el siguiente:

Principios de la Administración de Justicia

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional

En buena cuenta, el debido proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y a su vez constituye un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática¹².

El caso del derecho de defensa, resulta ser una parte del debido proceso que implica en el campo no sólo el acceso a un defensa libre o pública, sino a lo que podemos denominar una defensa eficaz que procure representar los intereses del procesado, quien al final va a ser a quien se le absuelva o resulte condenado.

4.3.3. Análisis de normas ordinarias

En el presente caso no vamos a referir de qué se trata el contenido de las normas que presentamos, pues ya sido parte de la exposición que a lo largo de este capítulo hemos venido desarrollando. Señalaremos que desde el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, se establece el derecho de defensa de forma obligatoria para los procesados.

¹² Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 78.

Artículo IX. Derecho de Defensa:

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.
2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.

Consideramos que éste es el artículo en el que se debe indicar que la defensa debe ser realmente técnica y especializada, debido al bien jurídico que se discute en un proceso penal.

Pero la garantía del derecho de defensa lo encontramos también en el contenido de otros artículos, como:

Artículo 71: Derechos del imputado.-

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.

Artículo 84. Derechos y deberes del abogado defensor

El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes:

Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial.

Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos.

Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender.

El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.

Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda.

Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.

Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.

Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.

Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado.

Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.

Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.

El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia."

Deberá tenerse en cuenta que en el caso de la etapa intermedia, el abogado defensor tendrá un abanico de posibilidades de ejercicio de la defensa técnica, conforme se lo consigna en el siguiente artículo del Código procesal penal

Artículo 350 Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.-

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán:

- a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección;
- b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
- c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, en lo pertinente;
- d) Pedir el sobreseimiento;
- e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad;
- f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos;

g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral; o,

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.

Como se ha expuesto, y conforme al análisis del contenido, existe la necesidad de salvaguardar que las partes lleguen en excelentes condiciones de defensa al empezar el contradictorio, que se inicia en la etapa de intermedia.

Frente al monopolio de la acción penal que ostenta el Ministerio Público, corresponde a la defensa técnica contrarrestar dicho poder, a través de un ejercicio serio, competente y sobre pensando que quien se juega su libertad es el acusado.

Como representante de la legalidad, muchas veces ya en la práctica han sido los jueces quienes han hecho el control de una defensa debida a favor de su patrocinado, por lo que habría que legalizar este aspecto no contemplado en el Código Procesal Penal vigente.

Una debida defensa supone conocimiento del caso, conocimiento del derecho, conocimiento de las técnicas de litigación oral, actuación en función del interés del representado.

Por estas razones, en el nuevo Código Procesal Penal proponemos agregar:

Artículo IX. Derecho de Defensa:

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.

Corresponde al juez penal de investigación preparatoria o de juzgamiento el ejercicio de una debida defensa técnica a favor de las partes procesales.

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.

Conclusiones

Primera.- Las características del ejercicio del derecho de defensa implica que ante un requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público:

- Se formule una teoría del caso que contenga una defensa negativa o defensa mixta del patrocinado.
- La posición procesal frente a la acusación implica que exista argumentos de defensa que se corresponda con la inocencia del procesado o con la insuficiencia probatoria o con la rebaja sustancial de la sanción penal a imponer, según sea el caso.
- La teoría del caso sea correspondida con argumentos de hecho expresados en aseveraciones por demostrar.
- Los hechos expuestos estén debidamente corroborados con medios probatorios;
- Los medios probatorios hayan sido presentados durante la investigación preparatoria, o pueden ser incorporados bajo la figura de medios probatorios extemporáneos.

Segunda.- La audiencia de control de acusación debe ser entendida como la de saneamiento de las pretensiones de las partes, antes de iniciar el juicio oral, de tal forma que legalmente se garantiza:

- Las partes estén informadas formalmente de la acusación presentada por el Ministerio Público.
- Las partes esté informadas de los cuestionamientos que se han hecho a la acusación fiscal y a la teoría del caso contenida en la misma.

- El ejercicio del derecho de defensa para cuestionar la acusación sea ejercido dentro del plazo establecido por ley, es decir, diez días.
- Las partes hagan su exposición en la audiencia de control de acusación.

Tercera.- Para consolidar una teoría del caso, en base a estrategias a proponer y postular durante la audiencia de control de acusación, se debe tener presente

- El argumento expuesto debe consolidar la teoría del caso del caso del contradictorio.
- La teoría del caso que se presente debe ser expresada en hechos, norma y medios probatorios.
- La estrategia de defensa que se presenta al Juez de Investigación Preparatoria deba contener ya el argumento de defensa que se oriente a la absolución del procesado.

Cuarta.- En el caso de la ciudad de Chiclayo, se puede concluir que si bien es cierto se ejercita el derecho de defensa de alguna manera en todos los casos analizados, es cierto también que analizando el tema de fondo concluimos que la defensa técnica deja mucho que desear, en el sentido en el que no existe una estructura de la teoría del caso proporcionada por la defensa técnica, y cuando de manera expresa se formula la misma, ésta no se corresponde con las proposiciones exculpatórias que se pretende demostrar. A partir del análisis de las defensas técnicas analizadas, se llega a la conclusión que se perjudica directamente el interés del procesado aferrándose a una defensa técnica negativa no estructurada, cuando más bien correspondería elaborar una propuesta de defensa distinta que favorezca el interés personal y directo del procesado.

Quinta.- Entonces, se considera que si al menos se establecen los supuestos que se indican en las conclusiones número a, b, y c, entonces se tiene gran probabilidad de garantizar la viabilidad de la audiencia de control de acusación, garantizando el cabal ejercicio del derecho de defensa del procesado. En el caso en el que el ejercicio de derecho defensa del procesado más bien procure su indefensión, corresponde entonces al Juez de investigación preparatoria, como defensor de la legalidad, subrogar al abogado defensor para que en su reemplazo concurra un letrado frente a este contexto garantice el debido derecho de defensa, sustentando el juez su accionar en el contenido del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, cuya modificatoria se está proponiendo.

Recomendaciones

Primera.- Fomentar el debate a nivel de los foros académicos sobre los temas de indefensión a los que indirectamente el propio sistema del nuevo proceso penal estaría sometiendo, como es el caso del derecho de defensa de los procesados, quienes no sólo deben ser asistidos con la participación de un letrado, sino que dicho asesoramiento profesional sea realmente efectivo.

Segunda.- En ese mismo sentido, el agraviado y la víctima muchas veces concentran su espacio procesal en abonar a la pretensión punitiva del Ministerio Público, dejando de lado que también la pretensión económica debe ser probada, y en el análisis que hemos mencionado tampoco son representados debidamente en el audiencia de control de acusación, razón por la que debe ser también considerado este aspecto en futuras investigaciones.

Referencias Bibliográficas

AUTORES NACIONALES

1. Pedro Miguel Angulo Arana y Elma Vergara Cabrera (2006). *La Investigación y el Delito En el Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Gaceta Jurídica.
2. Mayta, D. (2017). El proceso inmediato por flagrancia delictiva. Estándar de prueba y derecho a la defensa técnica eficaz. En M. Huerta, *El proceso inmediato* (págs. 127-164). Lima: Instituto Pacífico.
3. Francisco Celis Mendoza Aimak (julio de 2020). La defensa técnica eficaz, garantía del debido proceso penal. *Actualidad Jurídica*(73), 173-186.
4. Jose Antonio Neyra Flores (2010). *Manual del nuevo proceso penal y litigación oral*. Lima: Moreno.
5. Hernández, C. (2013). El derecho de defensa adecuada en el sistema penal acusatorio. *Ciencia Jurídica*, 31.
6. Carlos Machuca Fuentes (2004). *La oralidad y su aplicación en el proceso penal peruano*. Lima: Gaceta Jurídica.
7. Arsenio Ore Guardia (2016). *Derecho procesal penal peruano – Análisis y comentarios al Código Procesal Penal.Tomo III*. Lima: Gaceta Jurídica.
8. Arsenio Ore Guardia (2016). *Derecho Procesal Penal Peruano. Tomo I*. Lima: Gaceta Jurídica.
9. Alonso Raul Peña Cabrera (07 de setiembre de 2008). *La etapa intermedia en el Nuevo Código Procesal Penal*. Obtenido de www.reformaprocesal.blogspot.pe
10. Alonso Raul Peña Cabrera (2011). *Manual de Derecho Procesal Penal. Con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal* (3ra Edición ed.). Lima: San Marcos.
11. Jorgue Rosas Yataco (2009). *Derecho Procesal Penal – con aplicación al Nuevo*

- Código Procesal Penal, sujetos y partes procesales.* Lima: Jurista Editores.
12. Cesar Eugenio San Martín Castro (2003). *Derecho Procesal Penal. Volumen I.* Lima: Grijley.
 13. Cesar Eugenio San Martín Castro (2005). *Introducción general al estudio del Nuevo Código Procesal Penal.* Lima: Palestra.
 14. Pablo Sánchez Velarde (2009). *El nuevo proceso penal.* Lima: Moreno.
 15. Pablo Talavera Elguera (2009). *Manual del Derecho Probatorio y de la valorización de las pruebas en el proceso penal común.* Lima: Ebra.

AUTORES INTERNACIONALES

1. Ambos, K. (2005). *Principios del proceso penal europeo. Análisis de la Convención Europea de Derechos Humanos.* Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
2. Daniel Federico Chowell Arenas (2008). *Los principios del proceso penal. Su regulación y su realidad en el estado de Guanajuato.* Guanajuato: Universidad de Guanajuato.
3. Baytelman, A., & Duce, M. (2005). *Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba.* Lima: Alternativas.
4. Alberto Binder (1993). *Introducción al Derecho Procesal Penal.* Buenos Aires: Ad Hoc.
5. Alberto Binder (2004). *Introducción al derecho procesal penal.* Buenos Aires: Ad Hoc.
6. Víctor Fairen (1969). El “encausado” en el proceso penal . En *Temas del ordenamiento procesal* (pág. 1245). Madrid: Tecnos.
7. Francisco Fernández Segado (1994). La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción. *RGD(600)*, 9257-9284.

8. Finzi, C. (1973). Aspectos del derecho de defensa en el proceso penal. *Revista de Derecho Procesal Iberoamerican*, 760.
9. Vicente Gimeno Sendra (1988). *Constitución y proceso*. España: Tecnos.
10. Gómez, E., & Herce, V. (1987). *Derecho Procesal Penal*, (Décima ed.). Madrid: Artes Gráficas y Ediciones.
11. Oscar Julian Guerrero Peralta (2005). *Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal*. Bogotá: Nueva Jurídica.
12. Julio Maier (2004). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
13. Vicenzo Manzini (1951). *Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo II*. Buenos Aires: Jurídicas Europa América.
14. Juan Montero (1997). *Principios del proceso penal, una explicación basada en la razón*. Valencia: Tirant lo Blanch.
15. Juan Moreno (1982). *La defensa en el proceso penal (1ª ed.)*. Madrid: Civitas.
16. Oronoz, C. (2006). *El juicio oral en México y en Iberoamérica (2ª edición ed.)*. México: Cárdenas Blasco.
17. Pico, J. (2008). *Las Garantías Constitucionales del Proceso*. Barcelona: Bosch.
18. Roxin, C. (2000). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Del Puerto.
19. Vázquez, J. (2004). *Derecho Procesal Penal. La realización penal. Tomo II*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.

Anexos

Anexo 1: Datos Básicos del Problema

Planteamiento de la Investigación

a) Surgimiento del Problema

Toda aquella persona que hace frente a un proceso penal en calidad de acusado, sabe que tiene la posibilidad real de verse afectado en su libertad personal, que a la vez lo puede llevar a permanecer algún tiempo privado de su libertad individual y esto implica la urgencia de verse asesorado por un abogado que no sólo represente el interés procesal del encausado, sino también que organice su defensa con actos concretos que sean expresión que quiere se esclarezcan.

Esto precisamente porque a más de diez años de puesta en marcha del proceso penal, se debe precisar que debe haberse asumido que implica el cambio de actitudes y comportamientos de las partes procesales, pero sobre todo el diseño de estrategias que partan de un sinceramiento de las posibilidades de éxito, todo en beneficio de los sujetos procesales a quienes se defiende y de quienes se busca se declare en derecho para que se establezca la justicia, la misma que resulta ser la finalidad del trabajo de todos.

De manera especial, se debe expresar que se va a analizar el trabajo que realizan los abogados defensores en los casos en los que les toca patrocinar a los procesados, puesto que para asumir, preparar, conducir y ejecutar una defensa dentro del contexto del Nuevo Código Procesal Penal, se debe saber cuál es el rol que como actores del proceso nos toca asumir a partir del inicio de las diligencias preliminares. Tomar bajo nuestro control una defensa técnica en el marco de las vigentes normas adjetivas, supone por un lado tener presente que no es nuestro interés el que debe prevalecer, pues defendemos a la sociedad, o al agraviado o el caso del actor civil, por otro lado estar en condiciones de afirmar que la defensa que vamos a realizar va a tener éxito, incluso a pesar que existen elementos de prueba que hacer indicar a toda luz que el procesado resulta ser responsable del ilícito que se recoge en la acusación.

Este abanico de posibilidades reales decide la posibilidad de éxito de un caso, incluso la del propio representante del Ministerio Público, y muy por el contrario de lo que pueda afirmarse, a veces perdiendo el caso con respecto al acusado, éste resulta ser beneficiado

con la rebaja de la pena privativa de la libertad, en estricto cumplimiento del derecho premial que reconoce nuestra legislación procesal.

¿Sin embargo, cabe preguntarse si realmente la estrategia de defensa resulta ser la más conveniente en el sistema que implementamos, o si es que la estrategia que diseñamos refleja la realidad de lo que el acopio de elementos de convicción o elementos de pruebas que se han acopiado, y sobre los que se debe construir el sentido de contradicción en la audiencia de control de acusación?

Lo cierto es que, terminada la etapa de la investigación preparatoria, las partes en un proceso deben tomar decisiones, deben adoptar las mejores decisiones: se sobresee, se acusa, se fija monto de reparación civil, se hace defensa negativa, defensa positiva o defensa mixta, etc., pero en todos los casos se asume una determinación por la que se tiene que responder en juicio.

Pero el diseño de la defensa que se exige en la tramitación de casos penales, no es precisamente una del tipo complaciente, o de acompañamiento de la tarea que realiza el Ministerio Público, sino fundamentalmente una que agote toda posibilidad de defensa que suponga lo más conveniente para el interés del acusado. Esto por cuanto es de común acuerdo que existe hasta tres posibilidades de ejercer la defensa técnica en un caso penal: o se acepta la pretensión del Ministerio Público, o se contradice la misma en todos sus extremos o es que se acepta el elemento fáctico propuesto, pero se contradice la reparación civil o el quantum de la pena.

En el centro de esta inquietud se propone iniciar el presente trabajo de investigación a fin de establecer cómo las partes tomando la perspectiva de la acusación realizada por el Ministerio Público, disponen cada uno de los elementos que forman parte de su estrategia de defensa, y cómo consecuencia de ello, se quiere establecer de qué manera o con qué elementos probatorios van a acreditar la tesis de defensa que asumen. Desde este sentido, se quiere describir y analizar el trabajo estratégico del abogado defensor, pero tomando como base algunos casos que se han desarrollado en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

b) Formulación del Problema de Investigación

Las consideraciones expuestas nos llevan a determinar la siguiente interrogante:

¿De qué manera el derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019”

c) Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar la manera cómo el derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019.

Objetivos Específicos

- Precisar las características del derecho a la defensa técnica eficaz del procesado en casos penales.
- Describir la dimensión de la audiencia de control de acusación como parte del nuevo proceso penal peruano.
- Establecer las razones por las que resulta determinante consolidar las estrategias de la teoría del caso en la audiencia de control de acusación.
- Analizar actuaciones procesales de las partes en casos ocurridos en el juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, durante el año 2019.

Justificación de la Investigación

Cuando afirmamos que en el nuevo proceso penal debemos tener claro cuál es el rol de las partes en cada etapa procesal, estamos aludiendo no sólo al deber de conocimiento que debe tener cada parte del nuevo ordenamiento procesal, sino fundamentalmente de la obligación de elaborar y presentar al juez al juez la teoría del caso correspondiente, pero de manera oportuna.

Esto quizá no pueda ser entendido sino en función del principio de preclusión que rige cada estado del proceso penal, que significa que una vez vencido el plazo de actuación de las partes, no se puede ya ejercer el derecho de defensa con actos procesales que de por sí ya caducaron, con el terrible perjuicio que esto significa pues en la práctica lo que no hice en la oportunidad debida resulta imposible que pueda ejecutarlo en la siguiente etapa procesal.

Por esta razón entonces se debe observar en el momento oportuno, se debe objetar en el momento oportuno, se debe cuestionar en el momento oportuno, se debe proponer en el momento que corresponde, se debe ofrecer en el instante en el que la ley así lo dispone; de lo contrario se debe afrontar la responsabilidad procesal que ello origina, siendo muy perjudicial el caso del procesado o acusado en la medida en la que se encuentra en juicio su propia libertad ambulatoria.

Entonces la justificación del presente trabajo estriba en la necesidad de que las partes entiendan que, si bien resulta fundamental prepararse para afrontar el juzgamiento oral, es de mucha relevancia el diseño de estrategia que se debe hacer, pero a partir del control de acusación, pues buena parte del futuro del procesado se define precisamente en dicho estado procesal.

Como se podrá advertir, el presente trabajo resulta importante pues constituye una invitación para investigar sobre la manera cómo las partes asumen su responsabilidad procesal a partir de la audiencia de control de acusación, pero sobre todo por describir y analizar las opciones procesales que adoptan los sujetos procesales en etapa, la misma que debe considerarse como clave para establecer la responsabilidad penal del procesado.

Hipótesis

Si es que se garantiza el cabal ejercicio del derecho a la defensa técnica eficaz en los casos penales entonces la misma se debe manifestar en la estrategia procesal del acusado en la audiencia de control de acusación, a partir de casos judiciales en los juzgados penales de Chiclayo, año 2019.

Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos**Guía de Recolección de datos****1. Datos Generales****Expediente N°****Juzgado****Partes****Actuado procesal analizado****2. Aspectos a observar Conocimiento del caso****Conocimiento de la norma jurídica****Conocimiento del acopio probatorio****Conocimiento de la jurisprudencia****Defensa positiva****Defensa negativa****Defensa mixta****Sin defensa**

Anexo 3: Ejemplos de casos analizados

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN

Expediente	: 12153-2019-0-1708-JR-PE-01
Imputado	: JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES, BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO
Agraviado	: ESTADO PERUANO
Delito	: CONTRA LA SALUD PUBLICA -TRAFICO ILICITO DE DROGAS -PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Juez	: Dr. JOSE LUIS CHANAME PARRAGUEZ
Esp. De Aud.	: Abog. JUDITH ARMANDINA MENDOZA PAZ

I. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Chiclayo, siendo las nueve de la mañana del día veinticuatro de junio del dos mil veinte, la misma que se realiza a través del medio tecnológico de comunicación: HANGOUT MEET, ello conforme a los dispuesto en la **Resolución Administrativa N° 203-2020-PCSJLA/PJ, de fecha** 13 de abril de 2020, que dispone a los órganos de emergencia, hacer uso de los medios tecnológicos de comunicación (video conferencia en línea - sistema hangout meet, Whatsapp, etc.), así como cualquier otro medio que consideren necesario, evitando en lo posible la interrelación con personas que pudieran estar contagiadas con COVID-19, se hace necesario programar la audiencia utilizando los medios indicados; audiencia dirigida por el señor juez designado por Disposición Superior doctor **JOSE LUIS CHANAME PARRAGUEZ**, la realiza la **Audiencia de Control de Acusación** en el proceso seguido contra **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES, BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO** por el presunto delito **CONTRA LA SALUD PUBLICA -TRAFICO ILICITO DE DROGAS - PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS ,**

previsto en los artículos 296° del Código Penal con la agravante establecida en el artículo 297° inc. 6 del código penal ,en agravio de **ESTADO PERUANO**, la misma que está siendo grabada en el sistema de audio y demostrará el modo como se desarrolla la audiencia conforme lo establece el artículo 361° inciso 2 del Código Procesal Penal; pudiendo las partes acceder a la copia de dicho registro, por lo que el señor Juez indica que corresponde procedan las partes intervinientes convocadas a esta audiencia a identificarse oralmente para que conste en el registro; se verifique la individualización de las partes; y, su forma de notificación de las resoluciones fuera de esta audiencia.

II. ACREDITACIÓN

2.1. FISCAL: Dr. OMAR APAZA MANRIQUE, Fiscal adjunto de la Fiscalía especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas de Chiclayo

□ Domicilio Procesal: Calle Manuel maría izaga N° 115 cuarto piso – Chiclayo. Casilla electrónica 46259.

2.2. ABOGADO DEL IMPUTADO JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES; DR. ALVARO JULCA DÍAZ; con casilla N° 83015.

2.3. ABOGADO DEL IMPUTADO BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA: DR. ELVIS QUIROGA ODIAGA; con ICAL 6101 con casilla N° 38875.

2.4. ABOGADO DEL IMPUTADO SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO: DR. DUBERLI BELICO SANCHEZ con ICAL N° 8350 con casilla N° 38875.

2.5. ABOGADO INTERCONSULTA: DR. ERNESTO LAM SANCHEZ.

2.6. PROCURADOR PÚBLICO EN DELITOS DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

****JUEZ:** Pregunta a las partes procesales presentes si existe alguna objeción para la instalación de la audiencia.

Da por instalada la audiencia cediendo el uso de la palabra al señor fiscal para que sustente su requerimiento.

III. DEBATE:

3.1. ACUSACIÓN Y MEDIOS PROBATORIOS

- **FISCAL:** Sustenta su requerimiento acusatorio, exponiendo los hechos materia de investigación, los elementos de convicción con los que cuenta así como la pena y reparación civil que solicita imponerse al imputado.

- Asimismo ofrece como medios probatorios la testimonial y documentales consignadas en su requerimiento acusatorio escrito (Se registra en audio).
 - **ABOGADO DEL IMPUTADO BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA: DR. ELVIS QUIROGA ODIAGA:** Observa la acusación de manera formal y asimismo solicita el sobreseimiento. Asimismo, ofrece medios de prueba. (Grabado en audio)
 - **ABOGADO DEL IMPUTADO JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES; DR. ALVARO JULCA DÍAZ:** Observa formalmente la acusación, asimismo ofrece medios de prueba por el Principio de la Comunidad de la Prueba respecto a ciertas declaraciones. (Grabado en audio)
 - **ABOGADO DEL IMPUTADO SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO: DR. DUBERLI BELICO SANCHEZ:** Observa la acusación de manera formal y asimismo ofrece medios de prueba. (Grabado en audio).
 - **PROCURADOR PÚBLICO:** Solicita la suma de CINCO MIL SOLES por concepto de Reparación Civil. (Grabado en audio).
- JUEZ PROCEDE A EMITIR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDEN**

RESOLUCION NÚMERO: SEIS

Chiclayo, veinticuatro de junio
Del año dos mil veinte

PARTE CONSIDERATIVA: (Grabado en audio)

PARTE RESOLUTIVA: (Grabado en audio y transcrito).

SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADO el pedido de sobreseimiento por parte de la defensa de BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA oralizada por su defensa técnica y asimismo INFUNDADAS las observaciones formulados por los abogados de la defensa de JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO; en consecuencia declarar la validez formal y sustancial de la acusación formulada en contra de los acusados **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES, BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO.**

V. SANEAMIENTO PROBATORIO:

Luego de escuchar a las partes, el señor juez resolvió, mediante resolución SIETE, admitir los medios probatorios que ha oralizado el representante fiscal, así como por la defensa de los imputados teniendo en consideración también el Principio de la Comunidad de la Prueba invocado por la defensa de estos.

AUTO DE ENJUICIAMIENTO

RESOLUCION NÚMERO: OCHO

Chiclayo, veinticuatro de junio

Del año dos mil veinte. -

AUTOS, VISTOS, OIDOS: PRIMERO: En hora y fecha la audiencia preliminar de control de acusación según lo estipulado en los artículos 351 y 352 del Código Procesal Penal y considerando que este Juzgado de Investigación Preparatoria verifica que dicha acusación satisface los requisitos de validez, se ha declarado saneado el proceso y es factible en ese sentido la última etapa del proceso penal, por lo que se dicta **AUTO DE**

ENJUICIAMIENTO contra **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES con DNI N° 75730696**, nacido el 13 de mayo de 1995, natural de Lambayeque, con domicilio en Mz B lote 14 AAH Los Ángeles PPJJ Santa Rosa – Lambayeque ; **CONTRA SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO con DNI N° 45181551**, nacido el 27 de mayo de 1980, natural de Lambayeque, con domicilio en Calle Andrés Razuri PPJJ Santa Rosa – Lambayeque; y contra **BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA**; con **DNI N° 75778818**, nacido el 08 de julio de 1988, natural de Lambayeque, con domicilio en Mz F lote 18 AAHH Los Ángeles PPJJ Santa Rosa – Lambayeque como presunto autores del delito **CONTRA LA SALUD PÚBLICA** en su figura **TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS MEDIANTE ACTOS DE TRAFICO** conducta regulada y sancionada en el primer párrafo del artículo 296° del Código Penal con la agravante señalada en el inciso 6° del artículo 297° del mismos cuerpo de leyes en agravio de el **ESTADO PERUANO**; para quien el Ministerio Público, está solicitando se le imponga al imputado

BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA ASCENDENTE A LA SUMA DE MIL OCHOCIENTOS SOLES E INHABILITACIÓN POR CINCO AÑOS contra el **IMPUTADO JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA CIENTO OCHENTA DIAS MULTA EQUIVALENTE A MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SOLES E INHABILITACIÓN POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS** y contra el imputado **SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO la pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA CIENTO OCHENTA DIAS MULTA EQUIVALENTE A MIL OCHOCIENTOS SOLES E INHABILITACIÓN POR CINCO AÑOS Y ASIMISMO DE ACUERDO A LO QUE SE HA SOLICITADO EL PAGO DE UNA REPARACIÓN CIVIL EN LA SUMA DE CINCO MIL SOLES QUE PAGARAN LOS IMPUTADOS** a favor del **ESTADO agraviado**.

SEGUNDO: Los **HECHOS** alegados por el representante del Ministerio y oralizado en la presente audiencia, han quedado registrado en el sistema de audio.

TERCERO: Se dispone tener por **ADMITIDOS LOS MEDIOS PROBATORIOS** ofrecidos por el **REPRESENTANTE FISCAL** consistentes en:

Declaraciones.

1. **De los efectivos policiales LUISA JUAREZ OLAZABAL, JOSE CARLOS VASQUEZ BRAVO, OSMAR PINTADO BRITO, JOSE CHAPILLIQUEN GONZALES, GIANCARLOS NUÑEZ CHANAME Y CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ;** a quienes se les notificará en DITERPOL PNP Lambayeque; a fin de que declaren respecto a la forma y circunstancia como es que se procedió a la intervención de los hoy acusados en flagrancia delictiva, debiendo señalar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores a la intervención; testimoniales que se consideran pertinentes porque dichas personas en su condición de integrantes de la Policía Nacional, participaron en forma directa en la intervención, registro personal de los acusados y registro domiciliario en donde se encontró sustancias ilícitas compatibles para pasta básica de cocaína, conforme a las cantidades detalladas en las actas correspondientes.
2. **Del examen perito químico de la Dirección de Criminalística de Chiclayo. Capitan PNP MARKO DENIS PLASENCIA REBASA,** a quién se le notificará en Avenida Salaverry cuadra 09 S/N segundo piso Chiclayo a fin de que deponga respecto al Resultado Preliminar de Análisis Químico N° 158/19, resultado preliminar de análisis químico de droga N° 888/19; Resultado Preliminar de Análisis Químico de droga N° 891/19; Resultado Preliminar de Análisis Químico de droga N° 892/19; el dictamen pericial forense de análisis químico de droga N° 888/19; el dictamen pericial forense de análisis químico de droga N° 891/19; el dictamen pericial forense de análisis químico de droga N° 892/19; así como el dictamen pericial forense de examen toxicológico 983-985/19.
3. **Del examen de la Perito Químico farmacéutico PNP MARTHA V. RUI CABANA;** a quién se le notificará en Av. Aramburú N° 550 sexto piso – Surquillo – Lima; a fin de que deponga respecto al examen preliminar químico de drogas N° 9660/2019, así como el informe pericial forense de droga N° 9660/2019.

Documentales:

4. **Acta de Intervención Policial S/N –AREDANDRO PNP-CH;** consistente a la intervención que efectuó la policía especializada en antidrogas donde previamente tuvo conocimiento de un sujeto conocido como “CHUKY” se estaría dedicando a la comercialización de drogas probablemente PBC, en el AAHH “Los Ángeles” en el distrito de Lambayeque, así como la misma intervención policial a la altura de la Mz B, donde se logró observar a una persona de sexo masculino vestido con short blanco, parado frente a la puerta del inmueble ubicado en la Mz B lote 14 del AAHH, a quién se le acercaban personas apreciándose un intercambio al parecer de droga por

dinero, así es que en circunstancias que dos personas de sexo masculino uno de contextura gruesa vestido con polo color rojo y otro de contextura delgada vestido con polo deportivo de Alianza Lima se le acercaron y otra vez se apreció el intercambio se procedió a intervenir identificando a la persona que se encontraba parada en la puerta del inmueble como la persona de JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES (23), identificado con DNI N°75730696, a quien en su registro personal se le encontró un celular color blanco con IMEI 1 N° 354688057468328, IMEI 2 N° 354688057468336 y dinero en efectivo por la suma de ocho (08) monedas de un sol; y a la persona de contextura gruesa se le identificó como SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO (30), identificado con DNI N° 45181531, quien al realizarle el registro personal se le encontró portando un (01) morral de tela color negro, marca ADIDAS, encontrando en su interior cuarenta (40) envoltorios tipo Kete conteniendo en su interior sustancia blanco parduzca pulvurenta, con olor y características a PBC, agrupados en cuatro paquetitos de diez envoltorios, cada uno asegurado con ligas de diferentes colores; así como, dinero en efectivo por la suma de seis (S/. 6.00); y al sujeto de contextura delgada se identificó como BRYAN ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA (21), identificado con DNI N° 75778818, a quien en su registro personal se le encontró en el interior del bolsillo de su pantalón cinco (05) envoltorios tipo Kete hechos de papel cuaderno cada uno conteniendo en su interior sustancia blanco parduzca pulvurenta, con olor y características al parecer PBC, para luego ante la flagrancia delictiva, el intervenido JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES, aceptar su responsabilidad y voluntariamente con su autorización y consentimiento permitir el ingreso al personal policial al inmueble antes mencionado, encontrando en el ambiente utilizado como sala comedor y cocina, encontrándose sobre una mesa de maderas una (01) bolsa plástica transparente anudada en su extremo libre conteniendo en su interior sustancia parduzca pulvurenta húmeda, con olor y características al parecer PBC; un (01) colador color rojo, dos (02) cucharas de metal marca Stainless Facusa, una (01) tijera color azul marca Artesco, todos ellos al parecer, con adherencias de cocaína, varios recortes de papel cuaderno; seguidamente sobre otra mesa de madera se encontró una (01) bolsa plástica color rosada tipo chequera abierta, conteniendo en su interior cuatrocientos un (401) envoltorios tipo Kete hechos de recorte de papel cuaderno cada uno de ellos conteniendo sustancia blanco parduzca con olor y características al parecer PBC agrupados en cuarenta paquetitos de diez envoltorios cada uno asegurados con una liga de diferentes colores y un envoltorio suelto; continuando con el registro de los demás ambientes del inmueble no encontrándose mas evidencia para el TID; para posteriormente los intervenidos sean puestos a disposición y se efectúe el comiso e incautación de la droga y especies para que sean trasladados a la AREANT PNP-CHICLAYO, con la finalidad de continuar con las diligencias y las posteriores investigaciones correspondientes.

5. **Acta de Registro Personal e Incautación,** De la persona de Jorge Junior Vidaurre Cespedes, a quien se le encontró en su registro personal un equipo

celular color dorado, con su respectivo Chip, así también se le encontró ocho monedas de S/1.00 un sol.

6. **Acta de Registro Personal**, Comiso e Incautación: De la persona de Segundo Víctor Castillo Carrillo, a quién se le encontró en su registro personal un morral color negro marca ADIDAS, de dos compartimentos , encontrando en el compartimento superior 40 envoltorios tipo Ketes, hechos recorte de papel cuaderno cuadriculado, conteniendo en su interior, sustancia blanco parduzca compatible a Pasta Básica de Cocaína, agrupados en 4 paquetitos de 10 envoltorios cada paquete, asegurados con ligas de diferentes colores. Así mismo se le encontró tres monedas de S/.02.00 Soles.
7. **Acta de Registro Personal y Comiso**. De la persona de Bryan Alexis Santisteban Requena, a quien, al efectuarle, el registro personal se le encontró, cinco envoltorios tipo Ketes, hechos de papel de recorte cuadriculado, conteniendo en su interior sustancias, blanco parduzco compatible a Pasta Básica de Cocaína.
8. **Acta de Registro Domiciliario, Comiso e incautación**. Consistente al registro del inmueble de la persona de Jorge Junior Vidaurre Céspedes, ubicado en Mz. B Lt. 14 del AA.HH. AA.HH “ Los Ángeles”, quien con su autorización y consentimiento permitió el ingreso al personal policial al inmueble antes mencionado, encontrando en el ambiente utilizado como sala comedor y cocina, encontrándose sobre una mesa de maderas una (01) bolsa plástica transparente anudada en su extremo libre conteniendo en su interior sustancia parduzca pulvurenta húmeda, con olor y características al parecer PBC; un (01)colador color rojo, dos (02) cucharas de metal marca Stainless Facusa, una (01) tijera color azul marca Artesco, todos ellos al parecer, con adherencias de cocaína, varios recortes de papel cuaderno; seguidamente sobre otra mesa de madera se encontró una (01) bolsa plástica color rosada tipo chequera abierta, conteniendo en su interior cuatrocientos un (401) envoltorios tipo Kete hechos de recorte de papel cuaderno cada uno de ellos conteniendo sustancia blanco parduzca con olor y características al parecer PBC agrupados en cuarenta paquetitos de diez envoltorios cada uno asegurados con una liga de diferentes colores y un envoltorio suelto.
9. **Acta de Visualización de llamadas y mensaje de Celular**: Consistente al equipo celular que se le encontró al investigado Jorge Junio Vidaurre Céspedes cuando fue intervenido en donde se verifica entre sus contactos agendados, diversos mensajes, relativos al negocio ilícito de sustancias ilícitas, mensajes de textos que se precisaron.

CUARTO:

- Por la defensa técnica de los imputados del señor **BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA se admite:**

Declaraciones:

- **La declaración de los efectivos policiales Luisa Juárez Olazábal, José Carlos Vásquez Bravo, Osmar Pintado Brito, José Yapilliquen Gonzales, Giancarlo Núñez Samame y Carlos Mendoza Rodríguez;** quienes declararan respecto a las formas y circunstancias en cómo se produjo la intervención policial de los acusados, así como para que precisen sobre la información de inteligencia que se tuvo para proceder a la intervención, y de cuantas personas en concreto se tuvo conocimiento que se estarían dedicando a la comercialización de drogas. Asimismo precisen si al acusado Bryan Alexis Santisteban Requena, puso resistencia a la intervención policial, y si este fue intervenido comercializando drogas.
- **Examen pericial del perito Químico Capitán PNP MARKO DENYS PLASENCIA REBASA;** para que explique las conclusiones arribadas en el resultado preliminar de Análisis Químico de drogas N° 891-2019, así como el dictamen pericial toxicológico N° 983-985/19.

Documentales:

- **Acta de intervención policial S/N -AREDANDRO PNP-CH;** mediante la cual se demostrará que la intervención policial estuvo orientada únicamente a una sola persona, y asimismo que al recurrente no se le intervino comercializando ni realizando actos de tráfico ilícito de drogas.
 - Acta de registro personal y comiso realizada al acusado Bryan Alexis Santisteban Requena, con lo cual se demostrará que a este acusado únicamente se le intervino en posesión de 05 ketes de PBC, que le fueron vendidos por el acusado Jorge Junior Vidaurre Cespedes, y que estaban destinados para su propio e inmediato consumo.
- Por la defensa de **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES** se admite como médios probatorios: Por el principio de la comunidad de la prueba los mismos que há ofrecido el Ministerio Público entre ellos:

Declaraciones:

- La testimonial de los efectivos policiales **Luisa Juárez Olazábal, José Carlos Vásquez Bravo, Osmar Pintado Brito, José Yapilliquen Gonzales, Giancarlo Núñez Samame y Carlos Mendoza Rodríguez.**

- **Examen pericial del perito Químico Capitán PNP MARKO DENYS PLASENCIA REBASA**

Documentales:

- **Acta de intervención policial S/N -AREDANDRO PNP-CH;** mediante la cual se demostrará que la intervención policial estuvo orientada únicamente a una sola persona, y asimismo que al recurrente no se le intervino comercializando ni realizando actos de tráfico ilícito de drogas. ○ Acta de registro personal y comiso realizada al acusado Jorge Junior Vidaurre Céspedes.
- Por la defensa de **SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO** se admite como medios probatorios: Por el principio de la comunidad de la prueba los mismos que ha ofrecido el Ministerio Público entre ellos:

Declaraciones:

- La testimonial de los efectivos policiales **Luisa Juárez Olazábal, José Carlos Vásquez Bravo, Osmar Pintado Brito, José Yapilliquen Gonzales, Giancarlo Núñez Samame y Carlos Mendoza Rodríguez.**
- **Examen pericial del perito Químico Capitán PNP MARKO DENYS PLASENCIA REBASA**

Documentales:

- **Acta de intervención policial S/N -AREDANDRO PNP-CH;** mediante la cual se demostrará que la intervención policial estuvo orientada únicamente a una sola persona, y asimismo que al recurrente no se le intervino comercializando ni realizando actos de tráfico ilícito de drogas. ○ Acta de registro personal y comiso realizada al acusado Segundo Víctor Castillo Carrillo.

QUINTO: TENER como partes legitimadas al proceso al representante del Ministerio Público y a los imputados **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES, BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO.**

SEXTO: REMITASE en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los actuados pertinentes **al Juzgado Penal COLEGIADO**, conforme al artículo 28°

del Código Procesal Penal, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Se deja constancia que el acusado **JORGE JUNIOR VIDAURRE CESPEDES** se encuentra sujetos a la medida de **PRISIÓN PREVENTIVA** la misma que **vencerá el 06 de julio del 2020** y los imputados **BRYAM ALEXIS SANTISTEBAN REQUENA Y SEGUNDO VICTOR CASTILLO CARRILLO** se encuentran con **COMPARESCENCIA RESTRINGIDA. TENER POR** notificados a los sujetos procesales presente con el respectivo auto de enjuiciamiento.

IV. CONCLUSIÓN

Siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana se da por terminada la audiencia y por cerrado el audio.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
**SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA
 DE JOSE LEONARDO ORTIZ**

Cuaderno : 3494-2019-0-1706-JR-PE-2°
 Juzgado : Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de J.L.O
 Imputado : Jhonatan Antonio Soto Pérez.
 Agraviado : José Noé Martínez Pupuche.-
 Delito : Hurto Agravado.
 Juez : Dr. Reynerio Díaz Tarrillo.
 Esp. Audio : Abog. Nicolás La Torre Maradiegue.

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE CONTROL DE ACUSACION DIRECTA

I.- INTRODUCCION

En el Distrito de José Leonardo Ortiz, siendo las once de la mañana del día catorce de agosto del año dos mil diecinueve, en la Sala de Audiencias del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria dirigida por el señor Juez doctor Reynerio Díaz Tarrillo se realiza la Audiencia Pública de Control de Acusación Directa en el proceso seguido contra **JHONATAN ANTONIO SOTO PEREZ** por el **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO AGRAVADO** en agravio de **JOSE NOE MARTINEZ PUPUCHE**; ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 186° inciso 1 del segundo párrafo del Código Penal, en el expediente N° 3494-2019-0-1706-JR-PE-2°.

Se hace conocer a los sujetos procesales que la audiencia se registrara en audio cuya grabación demostrara el modo como se desarrolla la audiencia conforme lo establece el artículo 361° inciso 2) del Código Procesal Penal pudiendo acceder a la copia de dicho registro, por lo que el señor Juez indica que corresponde verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia y dispone la individualización de las partes, su dirección y su forma de notificación de las resoluciones fuera de esta audiencia.

II.- ACREDITACIÓN.

1.- Fiscal: Dra. Luisita Onelia Ruiz Chapoñan, Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, con domicilio procesal en la calle Virrey Toledo S/N de José Leonardo Ortiz, con casilla Electrónica: N° 44318.

2.- Agraviado: José Noé Martínez Pupuche, identificado con DNI N° 16443172, con domicilio real en calle Chongoyape N° 130 Urb. San Lorenzo – José Leonardo Ortiz.-

3.- Abogado del imputado: Dr. Roger Villanueva Collazos, defensor público penal, identificado con ICAL N° 1085, con casilla electrónica N° 40243.

JUEZ: Precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta a efectos procesales, quedando autorizado el Juzgado a notificar a los sujetos procesales por cualquiera de los medios señalados. Dejando constancia que el imputado ha sido notificado en su domicilio real y mediante edictos de ley.

III.- DEBATE:

Juez: Da por instalada la audiencia y otorga el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento acusatorio. (Queda registrado en audio).

Fiscal: Sustenta su requerimiento acusatorio, narrando los hechos y elementos de convicción, por lo que solicita la pena de cuatro años un mes y diez días de pena privativa de libertad; y la suma de S/1,190.00 mil ciento noventa soles por concepto de reparación civil. (Queda registrado en audio).

Abogado del imputado: Hace observaciones formales a la acusación fiscal y solicita el sobreseimiento de la causa de conformidad al artículo 344 numeral 2 inciso d del código penal. (Demás argumentos se registra en audio).

Fiscal: Interviene, hace su réplica, indicando que el imputado de autos tiene una sentencia por el mismo delito en otro juzgado, por lo que se opone al sobreseimiento solicitado. (Queda registrado en audio).

Juez: Solicita a la señora fiscal que oralice sus medios de prueba. (Queda registrado en audio).

ETAPA DE OFRECIMIENTO DE MEDIOS PROBATORIOS.-

FISCAL, OFRECIÓ sus medios probatorios, sustentando la pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de ellas. (Se registró en audio).

Juez: Corre traslado al abogado de la defensa del imputado con los medios probatorios ofrecidos por la representación fiscal. (Se registró en audio).

Abogado del imputado: No se opone a los medios probatorios que ha ofrecido el representante del Ministerio Público. (Queda registrado en audio).

Juez: Emite las siguientes resoluciones. (Queda registrado en audio).

IV.- RESOLUCION NÚMERO: TRES

José Leonardo Ortiz, catorce de agosto

Del año dos mil diecinueve.-

PARTE EXPOSITIVA : Se registró en audio

PARTE CONSIDERATIVA : Se registró en audio

PARTE RESOLUTIVA : Se transcribe SE

RESUELVE:

DECLARAR LA VALIDEZ FORMAL Y SUSTANCIAL de la acusación en los términos precisados por la señora representante del Ministerio Público e infundadas las observaciones formales y el sobreseimiento planteado por el abogado defensor del imputado.

V.- RESOLUCION NÚMERO: CUATRO

José Leonardo Ortiz, catorce de agosto

Del año dos mil diecinueve.-

PARTE EXPOSITIVA : Se registró en audio

PARTE CONSIDERATIVA : Se registró en audio

PARTE RESOLUTIVA : Se transcribe SE

RESUELVE:

I] TENERSE POR OFRECIDOS Y ADMITIDOS LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR LA SEÑORA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, mencionados en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTO DE ENJUICIAMIENTO

VI.- RESOLUCION NÚMERO: CINCO

José Leonardo Ortiz, catorce de agosto

Del año dos mil diecinueve.-

AUTOS, VISTOS Y OIDAS las parte en la presente sesión de audiencia y **CONSIDERANDO:**

Primero: Habiéndose realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 351° y 352° del Código Procesal Penal y realizado el control jurisdiccional de los requisitos formales y sustanciales de la acusación a efecto de permitir un pronunciamiento de fondo de conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento se resuelve **DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO** contra el acusado **JHONATAN ANTONIO SOTO PEREZ**, sexo masculino, soltero, identificado con DNI N° 41709571, nacido el 21/02/1983, natural del distrito de San Miguel – Lima, edad 36 años, con 1° de secundaria, hijo de José y Leonor, con domicilio real en calle Tahuantinsuyo N° 1183 de la Urb. San Lorenzo - José Leonardo Ortiz y mediante edictos electrónicos, siendo su abogado en esta audiencia pública Dr. Roger Villanueva Collazos, con casilla electrónica N° 39895, como presunto autor del **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO AGRAVADO** en agravio de **JOSE NOE MARTINEZ PUPUCHE**; ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 186° inciso 1 del segundo párrafo del Código Penal, para quien el Ministerio Público está solicitando **CUATRO AÑOS UN MES Y DIEZ DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, e INHABILITACION**; y por concepto de reparación civil se solicita la suma de S/1,190.00 mil ciento noventa soles a favor de la parte agraviada.

Se ADMITEN como pruebas del Ministerio Público:

Testimonial:

1.- De JOSÉ NOE MARTINEZ PUPUCHE, en su Condición: Testigo – Agraviado, con domicilio Real: Calle Chongoyape N° 130 de la Urb. San Lorenzo de JLO. Extremos de la Declaración: Quien declarará cómo y en qué circunstancias tomó conocimiento de la presencia del acusado en el Interior de su inmueble ubicado en la Calle Chongoyape N° 130 de la Urb. San Lorenzo de JLO el 27 de Enero del 2019 y de cómo tomo conocimiento de la identidad del acusado.-

2.- Del PNP JHONATAN VERGARA NONAJULCA, en su Condición: Testigo, con Domicilio en la II DIRTEPOL- Lambayeque. Extremos de la Declaración: Quien declarará conforme al contenido del Acta de denuncia verbal y de Constatación Policial de fecha 27 de Enero del 2019.-

DOCUMENTALES:

3.- Acta de Denuncia Verbal N' 193 de fecha 27 de Enero del 2019 a las 04:00 horas, con el que se acreditará que el agraviado fue víctima de la sustracción de su celular marca Lenovo de color negro y de su billetera que contenía la suma de S/ 680.00 soles, los cuales fueron sustraído por el acusado del interior del domicilio del agraviado ubicado en la Calle Chongoyape N° 130 de JLO - Ser piso, aprovechando el acusado que el agraviado se encontraba descansando, pero él se percató de los hechos y observó la silueta del acusado, quien mientras huía, su casaca se quedó enganchada con unos cables, la cual fue encontrada por el agraviado y al revisarla encontró el DNI del acusado, conociendo así su identidad.-

4.- Acta de Recepción de Documento de Identidad de fecha 27 de Enero del 2019, con el que se acreditará que el agravio hizo entrega del DNI N° 41709571 de propiedad de Jhonatan Antonio Soto Pérez, a quien sindicó como autor de la sustracción de sus bienes del interior de su domicilio.-

5.- Acta de Constatación Policial, con el que se acreditará que Personal PNP se constituyó al inmueble del agraviado, observándose que las casas colindantes

dan acceso al piso del inmueble del agraviado, así como tampoco existe daños en las puertas y ventanas de su domicilio.-

6.- Contrato de prestación de servicios adicionales y transacciones, con el que se acreditará la preexistencia y titularidad del celular sustraído.-

7.- Certificado de Antecedentes Penales N° 3511315, con el que se acreditará que a la fecha de los hechos, el acusado no antecedentes penales, lo cual servirá para sustentar nuestra pretensión punitiva.-

TENGASE como partes constituidas del proceso al representante del Ministerio Público, y el acusado **JHONATAN ANTONIO SOTO PEREZ** las pruebas admitidas al Juzgado Penal Unipersonal, encargado del juicio oral con la debida nota de atención, dentro del plazo de **CUARENTA Y OCHO HORAS** de dictada la presente resolución, **PRECISANDOSE** que contra el imputado se ha dictado la medida de comparecencia simple y **NO** existe constitución en actor civil, **NO** existen convenciones probatorias.

VII.- NOTIFICACION:

Juez: Notifíquese en este acto a los sujetos procesales asistentes a la audiencia.

Fiscal: Refiere estar conforme (Queda registrado en audio)

Abogado del acusado: Refiere estar conforme (Queda registrado en audio)

VIII.- CONCLUSION:

Siendo las once y veinte minutos de la mañana se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación de audio, procediendo a firmarla el Señor Juez y el especialista de audiencias encargado de la redacción del acta conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Penal, se entrega en forma inmediata y gratuita copia certificada del acta de registro a los intervinientes. -

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. MARY I. COLINA MORENO, asesora de tesis, revisora del trabajo de investigación del tesista **Luis Alberto Arias Requejo**, titulada: **"EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA EFICAZ EN LOS CASOS PENALES Y LA ESTRATEGIA PROCESAL DEL ACUSADO EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, A PARTIR DE CASOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2019"**. Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de **similitud de 17%** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la Evaluación de Originalidad de los documentos académicos, de investigación informativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Guías de uso del Software de setiembre de reporte de similitud de TURNITIN, aprobado mediante Resolución N° 659-2020-R, de fecha, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 07 de noviembre de 2021.



Mag. MARY I. COLINA MORENO
 Asesora



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Luis Arias Requejo
Título del ejercicio:	TESIS MAESTRIA 2021
Título de la entrega:	EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA EFICAZ EN LOS CASOS P...
Nombre del archivo:	Informe_final_-_dr_Requejo_setiembre_2021.docx
Tamaño del archivo:	235.83K
Total páginas:	124
Total de palabras:	25,058
Total de caracteres:	134,135
Fecha de entrega:	09-nov.-2021 11:50a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	1697883316



Mg. Mary Isabel Colina Moreno
Asesora

TÉCNICA EFICAZ EN LOS CASOS PENALES Y LA ESTRATEGIA PROCESAL DEL ACUSADO EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, A PARTIR DE CASOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS PENALES DE CHICLA

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	17%	1%	10%
ÍNDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.oreguardia.com.pe Fuente de Internet	2%
2	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	2%
3	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
4	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	idoc.pub Fuente de Internet	1%
6	repositorio.unasam.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.upt.edu.pe Fuente de Internet	1%